

Códigos electrónicos

Constitución Española

Constituição Espanhola

Selección y ordenación:

Traducción por: Don Afonso d' Oliveira Martins
y Doña Margarida Salema d' Oliveira Martins Gagliardini Graça

Edición actualizada a 20 de mayo de 2026

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO



La última versión de este Código en PDF y ePUB está disponible para su descarga **gratuita** en:
www.boe.es/biblioteca_juridica/

Alertas de actualización en Mi BOE: www.boe.es/mi_boe/

Para adquirir el Código en formato papel: tienda.boe.es



Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional, (CC BY-NC-ND 4.0).

@ Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Traducción por: Don Afonso d´Oliveira Martins y Doña Margarida Salema d´Oliveira Martins Gagliardini Graça

NIPO (PDF): 090-20-185-5

NIPO (Papel): 090-20-184-X

NIPO (ePUB): 090-20-186-0

ISBN: 978-84-340-2656-8

Depósito Legal: M-25845-2020

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
cpage.mpr.gob.es

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54
28050 MADRID
www.boe.es



SUMARIO

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

§ 1. Constitución Española	1
----------------------------------	---

CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA

§ 2. Constituição Espanhola	38
-----------------------------------	----

ÍNDICE SISTEMÁTICO

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

§ 1. Constitución Española.	1
<i>Preámbulo.</i>	1
TÍTULO PRELIMINAR	1
TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales.	3
CAPÍTULO PRIMERO. De los españoles y los extranjeros.	3
CAPÍTULO SEGUNDO. Derechos y libertades	3
Sección 1. ^a De los derechos fundamentales y de las libertades públicas	3
Sección 2. ^a De los derechos y deberes de los ciudadanos	7
CAPÍTULO TERCERO. De los principios rectores de la política social y económica	8
CAPÍTULO CUARTO. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales	10
CAPÍTULO QUINTO. De la suspensión de los derechos y libertades	10
TÍTULO II. De la Corona	11
TÍTULO III. De las Cortes Generales	13
CAPÍTULO PRIMERO. De las Cámaras	13
CAPÍTULO SEGUNDO. De la elaboración de las leyes	16
CAPÍTULO TERCERO. De los Tratados Internacionales	18
TÍTULO IV. Del Gobierno y de la Administración	18
TÍTULO V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	20
TÍTULO VI. Del Poder Judicial	22
TÍTULO VII. Economía y Hacienda	24
TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del Estado	26
CAPÍTULO PRIMERO. Principios generales.	26
CAPÍTULO SEGUNDO. De la Administración Local	27
CAPÍTULO TERCERO. De las Comunidades Autónomas	27
TÍTULO IX. Del Tribunal Constitucional.	33
TÍTULO X. De la reforma constitucional	34
<i>Disposiciones adicionales</i>	35
<i>Disposiciones transitorias</i>	35
<i>Disposiciones derogatorias</i>	37
<i>Disposiciones finales</i>	37

CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA

§ 2. Constituição Espanhola.	38
<i>Preámbulo.</i>	38
TÍTULO PRELIMINAR	38
TÍTULO I. Dos direitos e deveres fundamentais	40
CAPÍTULO I. Dos espanhóis e dos estrangeiros	40
CAPÍTULO II. Direitos e libertades.	40
1. ^a Secção. Dos direitos fundamentais e das libertades públicas	40
2. ^a Secção. Dos direitos e deveres dos cidadãos	43
CAPÍTULO III. Dos princípios orientadores da política social e económica	45
CAPÍTULO IV. Das garantias das libertades e direitos fundamentais	47
CAPÍTULO V. Da suspensão dos direitos e libertades	47
TÍTULO II. Da Coroa	48
TÍTULO III. Das Cortes Gerais	50
CAPÍTULO I. Das Câmaras	50

ÍNDICE SISTEMÁTICO

CAPÍTULO II. Da elaboração das leis	53
CAPÍTULO III. Dos Tratados Internacionais	55
TÍTULO IV. Do Governo e da Administração	55
TÍTULO V. Das relações entre o Governo e as Cortes Gerais.	57
TÍTULO VI. Do Poder Judicial.	59
TÍTULO VII. Economia e Finanças.	61
TÍTULO VIII. Da Organização Territorial do Estado	63
CAPÍTULO I. Princípios gerais	63
CAPÍTULO II. Da Administração Local	63
CAPÍTULO III. Das Comunidades Autónomas.	64
TÍTULO IX. Do Tribunal Constitucional	70
TÍTULO X. Da reforma constitucional	71
DISPOSIÇÕES ADICIONAIS	72
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.	72
DISPOSIÇÃO DERROGATÓRIA.	74
DISPOSIÇÃO FINAL	74

§ 1

Constitución Española

Cortes Generales

«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978

Última modificación: 20 de mayo de 2026

Referencia: BOE-A-1978-31229

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN**TÍTULO PRELIMINAR****Artículo 1.**

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

§ 1 Constitución Española

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4.

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5.

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8.

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida

§ 1 Constitución Española

la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

§ 1 Constitución Española

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22.

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25.

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales

§ 1 Constitución Española

de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Artículo 28.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Sección 2.^a De los derechos y deberes de los ciudadanos**Artículo 30.**

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34.

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35.

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37.

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

§ 1 Constitución Española

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40.

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42.

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44.

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46.

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49.

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

§ 1 Constitución Española

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oírán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52.

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

TÍTULO II

De la Corona**Artículo 56.**

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Artículo 57.

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 58.

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59.

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60.

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo

§ 1 Constitución Española

nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61.

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

Artículo 62.

Corresponde al Rey:

- a) Sancionar y promulgar las leyes.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
- h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63.

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64.

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65.

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

TÍTULO III

De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO

De las Cámaras

Artículo 66.

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67.

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68.

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69.

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

3. En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de

§ 1 Constitución Española

acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70.

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:

- a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
- b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
- c) Al Defensor del Pueblo.
- d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
- e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
- f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Artículo 71.

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72.

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73.

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

Artículo 74.

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

§ 1 Constitución Española

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75.

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76.

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Artículo 77.

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78.

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintidós miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Artículo 79.

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80.

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la elaboración de las leyes**Artículo 81.**

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82.

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83.

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

- a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84.

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86.

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades

§ 1 Constitución Española

de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 88.

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89.

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Artículo 90.

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91.

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92.

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

§ 1 Constitución Española

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

CAPÍTULO TERCERO

De los Tratados Internacionales

Artículo 93.

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94.

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

- a) Tratados de carácter político.
- b) Tratados o convenios de carácter militar.
- c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Artículo 95.

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96.

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

TÍTULO IV

Del Gobierno y de la Administración

Artículo 97.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

§ 1 Constitución Española

Artículo 98.

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100.

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 102.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

§ 1 Constitución Española

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105.

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106.

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

TÍTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artículo 108.

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109.

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110.

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

§ 1 Constitución Española

Artículo 111.

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113.

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Artículo 114.

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Artículo 115.

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Artículo 116.

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

§ 1 Constitución Española

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

TÍTULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 117.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118.

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119.

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120.

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

§ 1 Constitución Española

Artículo 121.

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122.

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123.

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124.

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125.

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126.

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127.

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La

§ 1 Constitución Española

ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

TÍTULO VII

Economía y Hacienda

Artículo 128.

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 129.

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Artículo 130.

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131.

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Artículo 132.

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 133.

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

§ 1 Constitución Española

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134.

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135.

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

§ 1 Constitución Española

- b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
- c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Artículo 136.

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

§ 1 Constitución Española

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Administración Local

Artículo 140.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas

Artículo 143.

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Artículo 145.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146.

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
 - a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
 - b) La delimitación de su territorio.
 - c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
 - d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148.

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
 - 1.^a Organización de sus instituciones de autogobierno.
 - 2.^a Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
 - 3.^a Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 - 4.^a Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
 - 5.^a Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
 - 6.^a Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
 - 7.^a La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
 - 8.^a Los montes y aprovechamientos forestales.
 - 9.^a La gestión en materia de protección del medio ambiente.
 - 10.^a Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
 - 11.^a La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
 - 12.^a Ferias interiores.
 - 13.^a El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
 - 14.^a La artesanía.
 - 15.^a Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.

§ 1 Constitución Española

- 16.^a Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
- 17.^a El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
- 18.^a Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
- 19.^a Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- 20.^a Asistencia social.
- 21.^a Sanidad e higiene.
- 22.^a La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.^a La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2.^a Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3.^a Relaciones internacionales.

4.^a Defensa y Fuerzas Armadas.

5.^a Administración de Justicia.

6.^a Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.^a Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8.^a Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.^a Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10.^a Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11.^a Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

12.^a Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13.^a Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14.^a Hacienda general y Deuda del Estado.

15.^a Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16.^a Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17.^a Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18.^a Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19.^a Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

§ 1 Constitución Española

20.^a Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.^a Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22.^a La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.^a Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.^a Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25.^a Bases de régimen minero y energético.

26.^a Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27.^a Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.^a Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29.^a Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.^a Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31.^a Estadística para fines estatales.

32.^a Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

§ 1 Constitución Española

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los

§ 1 Constitución Española

supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154.

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157.

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

§ 1 Constitución Española

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

§ 1 Constitución Española

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162.

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163.

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164.

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165.

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

TÍTULO X

De la reforma constitucional

Artículo 166.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

§ 1 Constitución Española

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168.

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169.

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

Disposición adicional primera.

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional segunda.

La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

Disposición adicional tercera.

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

Disposición adicional cuarta.

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Disposición transitoria primera.

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

Disposición transitoria segunda.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Disposición transitoria tercera.

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

Disposición transitoria cuarta.

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

Disposición transitoria quinta.

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

Disposición transitoria sexta.

Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Disposición transitoria séptima.

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

Disposición transitoria octava.

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.

§ 1 Constitución Española

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.

Disposición transitoria novena.

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

Disposición derogatoria.

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

Disposición final.

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

§ 2**Constituição Espanhola**

Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978
Última modificación: 20 de mayo de 2026
Referencia: BOE-A-1978-31229-PT

Dom Juan Carlos I, Rei de Espanha, a todos os que a presente virem e entenderem,
Sabei: Que as cortes aprovaram e o povo espanhol ratificou a seguinte Constituição:

PREÂMBULO

A Nação espanhola, desejando estabelecer a justiça, a liberdade e a segurança e promover o bem de quantos a integram, no uso da sua soberania, proclama a sua vontade de:

Garantir a convivência democrática no quadro da Constituição e das leis em conformidade com uma ordem económica e social justa.

Consolidar um Estado de Direito que assegure o império da lei como expressão da vontade popular.

Proteger todos os espanhóis e povos de Espanha no exercício dos direitos humanos, das suas culturas e tradições, línguas e instituições.

Promover o progresso da cultura e da economia para assegurar a todos uma digna qualidade de vida.

Estabelecer uma sociedade democrática avançada, e

Colaborar no fortalecimento de novas relações pacíficas e de eficaz cooperação entre todos os povos da Terra.

Em consequência, as Cortes aprovam e o povo espanhol ratifica a seguinte

CONSTITUIÇÃO**TÍTULO PRELIMINAR****Artigo 1.**

1. Espanha constitui-se num Estado social e democrático de Direito, que propugna como valores superiores do seu ordenamento jurídico a liberdade, a justiça, a igualdade e o pluralismo político.

2. A soberania nacional reside no povo espanhol, do qual emanam os poderes do Estado.

3. A forma política do Estado espanhol é a Monarquia parlamentar.

§ 2 Constituição Espanhola

Artigo 2.

A Constituição fundamenta-se na indissolúvel unidade da Nação espanhola, pátria comum e indivisível de todos os espanhóis, e reconhece e garante o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que a integram e a solidariedade entre todas elas.

Artigo 3.

1. O castelhano é a língua espanhola oficial do Estado. Todos os espanhóis têm o dever de a conhecer e o direito de a usar.

2. As demais línguas espanholas serão também oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de acordo com os seus Estatutos.

3. A riqueza das diversas modalidades linguísticas de Espanha é um património cultural que será objeto de especial respeito e proteção.

Artigo 4.

1. A bandeira de Espanha é formada por três listas horizontais, vermelha, amarela e vermelha, tendo a amarela o dobro da largura de cada uma das vermelhas.

2. Os Estatutos poderão reconhecer bandeiras e insígnias próprias das Comunidades Autónomas. Estas serão utilizadas junto à bandeira de Espanha nos seus edifícios públicos e nos seus atos oficiais.

Artigo 5.

A capital do Estado é a cidade de Madrid.

Artigo 6.

Os partidos políticos expressam o pluralismo político, concorrem para a formação e manifestação da vontade popular e são instrumento fundamental para a participação política. A sua criação e o exercício da sua atividade são livres no respeito pela Constituição e pela lei. A sua estrutura interna e funcionamento deverão ser democráticos.

Artigo 7.

Os sindicatos de trabalhadores e as associações empresariais contribuem para a defesa e promoção dos interesses económicos e sociais que lhes são próprios. A sua criação e o exercício da sua atividade são livres no respeito pela Constituição e pela lei. A sua estrutura interna e funcionamento deverão ser democráticos.

Artigo 8.

1. As Forças Armadas, constituídas pelo Exército de Terra, pela Armada e pelo Exército do Ar, têm como missão garantir a soberania e independência de Espanha, defender a sua integridade territorial e o ordenamento constitucional.

2. Uma lei orgânica regulará as bases da organização militar em conformidade com os princípios da presente Constituição.

Artigo 9.

1. Os cidadãos e os poderes públicos estão sujeitos à Constituição e ao resto do ordenamento jurídico.

2. Cabe aos poderes públicos promover as condições para que a liberdade e a igualdade do indivíduo e dos grupos em que se integra sejam reais e efetivas; remover os obstáculos que impeçam ou dificultem a sua plenitude e facilitar a participação de todos os cidadãos na vida política, económica, cultural e social.

3. A Constituição garante o princípio da legalidade, a hierarquia normativa, a publicidade das normas, a não-retroatividade das disposições sancionadoras não favoráveis ou restritivas de direitos individuais, a segurança jurídica, a responsabilidade e a interdição da arbitrariedade dos poderes públicos.

TÍTULO I

Dos direitos e deveres fundamentais**Artigo 10.**

1. A dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito da lei e dos direitos dos outros são fundamento da ordem política e da paz social.

2. As normas relativas aos direitos fundamentais e às liberdades que a Constituição reconhece serão interpretadas em conformidade com a Declaração Universal de Direitos Humanos e com os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas matérias ratificados por Espanha.

CAPÍTULO I

Dos espanhóis e dos estrangeiros**Artigo 11.**

1. A nacionalidade espanhola adquire-se, conserva-se e perde-se de acordo com o estabelecido pela lei.

2. Nenhum espanhol de origem poderá ser privado da sua nacionalidade.

3. O Estado poderá celebrar tratados de dupla nacionalidade com os países ibero-americanos ou com aqueles que tiveram ou têm uma particular vinculação com Espanha. Nesses mesmos países, ainda que não reconheçam aos seus cidadãos um direito recíproco, os espanhóis poderão naturalizar-se sem perder a sua nacionalidade de origem.

Artigo 12.

Os espanhóis são maiores de idade aos dezoito anos.

Artigo 13.

1. Os estrangeiros gozarão em Espanha das liberdades públicas que o presente Título garante nos termos que estabeleçam os tratados e a lei.

2. Somente os espanhóis serão titulares dos direitos reconhecidos no artigo 23, salvo o que, atendendo a critérios de reciprocidade, possa estabelecer-se por tratado ou lei para o direito de sufrágio ativo e passivo nas eleições municipais.

3. A extradição só será concedida em cumprimento de um tratado ou da lei, atendendo ao princípio da reciprocidade. Ficam excluídos da extradição os delitos políticos, não se considerando como tais os atos de terrorismo.

4. A lei estabelecerá os termos em que os cidadãos de outros países e os apátridas poderão gozar do direito de asilo em Espanha.

CAPÍTULO II

Direitos e liberdades**Artigo 14.**

Os espanhóis são iguais perante a lei, sem que possa prevalecer qualquer discriminação em razão do nascimento, raça, sexo, religião, opinião ou qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social.

1.ª Secção. Dos direitos fundamentais e das liberdades públicas**Artigo 15.**

Todos têm direito à vida e à integridade física e moral, sem que, em nenhum caso, possam ser submetidos a tortura nem a penas ou tratos desumanos ou degradantes. Fica

§ 2 Constituição Espanhola

abolida a pena de morte, salvo o que possam dispor as leis penais militares para tempos de guerra.

Artigo 16.

1. É garantida a liberdade ideológica, religiosa e de culto dos indivíduos e das comunidades sem mais limitação nas suas manifestações, do que a necessária para a manutenção da ordem pública protegida pela lei.

2. Ninguém poderá ser obrigado a declarar a sua ideologia, religião ou crenças.

3. Nenhuma confissão terá carácter estatal. Os poderes públicos terão em conta as crenças religiosas da sociedade espanhola e manterão as consequentes relações de cooperação com a Igreja Católica e as demais confissões.

Artigo 17.

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e à segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser com a observância do estabelecido neste artigo e nos casos e na forma previstos na lei.

2. A prisão preventiva não poderá durar mais tempo do que o estritamente necessário para a realização das averiguações tendentes ao esclarecimento dos factos, e, em todo o caso, no prazo máximo de setenta e duas horas, o detido deverá ser posto em liberdade ou à disposição da autoridade judicial.

3. Toda a pessoa detida deve ser informada de forma imediata, e de modo que lhe seja compreensível, dos seus direitos e das razões da sua detenção, não podendo ser obrigada a prestar declarações. É garantida a assistência de advogado ao detido nas diligências policiais e judiciais, nos termos que a lei estabeleça.

4. A lei regulará um procedimento de «habeas corpus» para que se produza a imediata posta à disposição judicial de toda a pessoa detida ilegalmente. Igualmente, por lei será determinado o prazo máximo de duração da prisão preventiva.

Artigo 18.

1. Garante-se o direito à honra, à intimidade pessoal e familiar e à própria imagem.

2. O domicílio é inviolável. Nenhuma entrada ou registo poderá ser feito nele sem o consentimento do titular ou decisão judicial, salvo em caso de flagrante delito.

3. É garantido o segredo das comunicações e, em especial, das postais, telegráficas e telefónicas, salvo decisão judicial.

4. A lei limitará o uso da informática para garantir a honra e a intimidade pessoal e familiar dos cidadãos e o pleno exercício dos seus direitos.

Artigo 19.

Os espanhóis têm direito a escolher livremente a sua residência e a circular pelo território nacional.

Além disso, têm direito a entrar e sair livremente de Espanha nos termos que a lei estabeleça. Este direito não poderá ser limitado por motivos políticos ou ideológicos.

Artigo 20.

1. São reconhecidos e protegidos os direitos:

a) A expressar e difundir livremente os pensamentos, ideias e opiniões pela palavra, por escrito ou por qualquer outro meio de reprodução.

b) À produção e criação literária, artística, científica e técnica.

c) À liberdade de cátedra.

d) A comunicar ou receber livremente informação verdadeira por qualquer meio de difusão. A lei regulará o direito à cláusula de consciência e ao segredo profissional no exercício destas liberdades.

2. O exercício destes direitos não pode ser restringido mediante nenhum tipo de censura prévia.

§ 2 Constituição Espanhola

3. A lei regulará a organização e o controlo parlamentar dos meios de comunicação social dependentes do Estado ou de qualquer ente público e garantirá o acesso a estes meios por parte dos grupos sociais e políticos significativos, respeitando o pluralismo da sociedade e das diversas línguas de Espanha.

4. Estas liberdades têm o seu limite no respeito pelos direitos reconhecidos neste Título, nos preceitos das leis que o desenvolvam e, especialmente, pelo direito à honra, à intimidade, à própria imagem e à proteção da juventude e da infância.

5. Só é permitida a apreensão de publicações, gravações e outros meios de informação em virtude de decisão judicial.

Artigo 21.

1. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício deste direito não necessitará de autorização prévia.

2. Nos casos de reuniões em lugares abertos ao público e de manifestações será feita comunicação prévia à autoridade, que só poderá proibi-las quando existam razões fundadas de alteração da ordem pública, com perigo para pessoas ou bens.

Artigo 22.

1. É reconhecido o direito de associação.

2. As associações que prossigam fins ou utilizem meios tipificados como delito são ilegais.

3. As associações constituídas ao abrigo deste artigo deverão inscrever-se num registo apenas para efeitos de publicidade.

4. As associações só poderão ser dissolvidas ou suspensas nas suas atividades em virtude de decisão judicial fundamentada.

5. São proibidas as associações secretas e as de carácter paramilitar.

Artigo 23.

1. Os cidadãos têm direito a participar nos assuntos públicos, diretamente ou através de representantes, livremente eleitos em eleições periódicas por sufrágio universal.

2. Do mesmo modo, têm direito a aceder em condições de igualdade às funções e cargos públicos, com os requisitos que estabeleçam as leis.

Artigo 24.

1. Todas as pessoas têm direito a obter a tutela efetiva dos juízes e tribunais no exercício dos seus direitos e interesses legítimos, sem que, em nenhum caso, possa verificar-se falta de defesa.

2. Do mesmo modo, todos têm direito ao Juiz ordinário predeterminado pela lei, à defesa e à assistência por um advogado, a ser informados acerca da acusação formulada contra eles, a um processo público sem dilações indevidas e com todas as garantias, a utilizar os meios de prova pertinentes para a sua defesa, a não fazer declarações contra si mesmos, a não se confessarem culpados e à presunção de inocência.

A lei regulará os casos em que, por razão de parentesco ou de segredo profissional, não se estará obrigado a prestar declarações sobre factos presumivelmente delituosos.

Artigo 25.

1. Ninguém pode ser condenado ou sancionado por ações ou omissões que no momento da sua produção não constituam delito, falta ou infração administrativa, segundo a legislação vigente naquele momento.

2. As penas privativas de liberdade e as medidas de segurança serão orientadas para a reeducação e reinserção social e não poderão consistir em trabalhos forçados. O condenado à pena de prisão que a estiver a cumprir gozará dos direitos fundamentais deste Capítulo, à exceção dos que se vejam expressamente limitados pelo conteúdo da sentença condenatória, pelo sentido da pena e pela lei penitenciária. Em todo o caso, terá direito a um

§ 2 Constituição Espanhola

trabalho remunerado e aos benefícios correspondentes da Segurança Social, assim como ao acesso à cultura e ao desenvolvimento integral da sua personalidade.

3. A Administração civil não poderá impor sanções que, direta ou subsidiariamente, impliquem privação da liberdade.

Artigo 26.

São proibidos os Tribunais de Honra no âmbito da Administração civil e das organizações profissionais.

Artigo 27.

1. Todos têm direito à educação. É reconhecida a liberdade de ensino.

2. A educação terá por objeto o pleno desenvolvimento da personalidade humana no respeito pelos princípios democráticos de convivência e pelos direitos e liberdades fundamentais.

3. Os poderes públicos garantem o direito que assiste aos pais para que os seus filhos recebam formação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções.

4. O ensino básico é obrigatório e gratuito.

5. Os poderes públicos garantem o direito de todos à educação, mediante uma programação geral do ensino, com participação efetiva de todos os setores afetados e a criação de centros educativos.

6. É reconhecida às pessoas singulares e coletivas a liberdade de criação de centros educativos, no respeito pelos princípios constitucionais.

7. Os professores, os pais, e, se proceder, os alunos, intervirão no controlo e gestão de todos os centros financiados pela Administração com fundos públicos, nos termos que a lei estabeleça.

8. Os poderes públicos inspecionarão e homologarão o sistema educativo para garantir o cumprimento das leis.

9. Os poderes públicos ajudarão os centros educativos que reúnam os requisitos que a lei estabeleça.

10. É reconhecida a autonomia das Universidades, nos termos que a lei estabeleça.

Artigo 28.

1. Todos têm direito a sindicalizar-se livremente. A lei poderá limitar ou excecionar o exercício deste direito às Forças ou Institutos armados ou aos demais Corpos submetidos à disciplina militar e regulará as peculiaridades do seu exercício para os funcionários públicos. A liberdade sindical compreende o direito de criar sindicatos e de inscrição no sindicato da sua eleição, bem como o direito dos sindicatos de formar confederações e de fundar organizações sindicais internacionais ou de se filiarem nestas. Ninguém poderá ser obrigado a inscrever-se num sindicato.

2. É reconhecido o direito à greve dos trabalhadores para a defesa dos seus interesses. A lei que regule o exercício deste direito estabelecerá as garantias necessárias para assegurar a manutenção dos serviços essenciais da comunidade.

Artigo 29.

1. Todos os espanhóis terão o direito de petição individual e coletiva, por escrito, na forma e com os efeitos que determine a lei.

2. Os membros das Forças ou Institutos armados ou dos Corpos submetidos à disciplina militar poderão exercer este direito apenas individualmente e com respeito pelo disposto na sua legislação específica.

2.^a Secção. Dos direitos e deveres dos cidadãos

Artigo 30.

1. Os espanhóis têm o direito e o dever de defender a Espanha.

§ 2 Constituição Espanhola

2. A lei fixará as obrigações militares dos espanhóis e regulará, com as devidas garantias, a objeção de consciência, assim como as demais causas de isenção do serviço militar obrigatório, podendo impor, nesse caso, uma prestação social de substituição.

3. Poderá ser estabelecido um serviço civil para o cumprimento de fins de interesse geral.

4. Mediante a lei poderão regular-se os deveres dos cidadãos em casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.

Artigo 31.

1. Todos contribuirão para suportar as despesas públicas de acordo com a sua capacidade mediante um sistema tributário justo inspirado nos princípios da igualdade e progressividade que, em nenhum caso, terá alcance confiscatório.

2. A despesa pública realizará uma afetação equitativa dos recursos públicos, e a sua programação e execução responderão aos critérios da eficiência e economia.

3. Só poderão ser estabelecidas prestações pessoais ou patrimoniais de carácter público com vinculação à lei.

Artigo 32.

1. O homem e a mulher têm direito a contrair matrimónio com plena igualdade jurídica.

2. A lei regulará as formas de casamento, a idade e capacidade para o contrair, os direitos e deveres dos cônjuges, as causas de separação e dissolução e os seus efeitos.

Artigo 33.

1. É reconhecido o direito à propriedade privada e à herança.

2. A função social destes direitos delimitará o seu conteúdo, de acordo com as leis.

3. Ninguém poderá ser privado dos seus bens e direitos senão por motivo justificado de utilidade pública ou interesse social, mediante a correspondente indemnização e em conformidade com o disposto nas leis.

Artigo 34.

1. É reconhecido o direito de fundação para fins de interesse geral, com vinculação à lei.

2. Será também aplicável às fundações o disposto nos números 2 e 4 do artigo 22.

Artigo 35.

1. Todos os espanhóis têm o dever de trabalhar e o direito ao trabalho, à livre escolha da sua profissão ou ofício, à sua promoção através do trabalho e a uma remuneração suficiente para satisfazer as suas necessidades e as da sua família, sem que em nenhum caso possa ser feita discriminação em razão do sexo.

2. A lei regulará um estatuto dos trabalhadores.

Artigo 36.

A lei regulará as peculiaridades próprias do regime jurídico dos Colégios Profissionais e o exercício das profissões tituladas. A estrutura interna e o funcionamento dos Colégios deverão ser democráticos.

Artigo 37.

1. A lei garantirá o direito à negociação coletiva laboral entre os representantes dos trabalhadores e dos empresários, assim como a força vinculativa dos acordos.

2. É reconhecido o direito dos trabalhadores e dos empresários a adotar medidas de conflito coletivo. A lei que regule o exercício deste direito, sem prejuízo das limitações que possa estabelecer, incluirá as garantias necessárias para assegurar o funcionamento dos serviços essenciais da comunidade.

Artigo 38.

É reconhecida a liberdade de empresa no quadro da economia de mercado. Os poderes públicos garantem e protegem o seu exercício e a defesa da produtividade, de acordo com as exigências da economia geral e, quando for caso disso, da planificação.

CAPÍTULO III

Dos princípios orientadores da política social e económica**Artigo 39.**

1. Os poderes públicos asseguram a proteção social, económica e jurídica da família.
2. Os poderes públicos asseguram, também, a proteção integral dos filhos, que são iguais perante a lei independentemente da sua filiação, e das mães, qualquer que seja o seu estado civil. A lei possibilitará a investigação da paternidade.
3. Os pais deverão prestar assistência aos filhos havidos dentro ou fora do casamento, durante a sua menoridade e nos demais casos em que tal legalmente proceda.
4. As crianças gozarão da proteção prevista nos acordos internacionais que velam pelos seus direitos.

Artigo 40.

1. Os poderes públicos promoverão as condições favoráveis ao progresso social e económico e a uma distribuição mais equitativa da riqueza regional e pessoal no quadro de uma política de estabilidade económica. De modo especial realizarão uma política orientada para o pleno emprego.
2. Do mesmo modo, os poderes públicos fomentarão uma política que garanta a formação e a reconversão profissionais; velarão pela segurança e higiene no trabalho e garantirão o descanso necessário, mediante a limitação da jornada de trabalho, as férias periódicas remuneradas e a promoção de centros adequados.

Artigo 41.

Os poderes públicos manterão um regime público de Segurança Social para todos os cidadãos, que garanta a assistência e prestações sociais suficientes para situações de necessidade, especialmente em caso de desemprego. A assistência e as prestações complementares serão livres.

Artigo 42.

O Estado velará especialmente pela salvaguarda dos direitos económicos e sociais dos trabalhadores espanhóis no estrangeiro e orientará a sua política para o seu regresso.

Artigo 43.

1. É reconhecido o direito à proteção da saúde.
2. Compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública através de medidas preventivas e das prestações e serviços necessários. A lei estabelecerá os correspondentes direitos e deveres de todos.
3. Os poderes públicos fomentarão a educação sanitária, a educação física e o desporto. Do mesmo modo, facilitarão a adequada utilização do lazer.

Artigo 44.

1. Os poderes públicos promoverão e tutelarão o acesso à cultura, à qual todos têm direito.
2. Os poderes públicos promoverão a ciência e a investigação científica e técnica em benefício do interesse geral.

§ 2 Constituição Espanhola

Artigo 45.

1. Todos têm direito a disfrutar de um meio ambiente adequado para o desenvolvimento da pessoa, bem como o dever de o conservar.

2. Os poderes públicos velarão pela utilização racional de todos os recursos naturais, com o objetivo de proteger e melhorar a qualidade de vida e defender e restaurar o meio ambiente, apoiando-se na indispensável solidariedade coletiva.

3. Para quem viole o disposto no número anterior, nos termos que a lei fixar serão estabelecidas sanções penais ou, quando for caso disso, administrativas, assim como a obrigação de reparar o dano causado.

Artigo 46.

Os poderes públicos garantirão a conservação e promoverão o enriquecimento do património histórico, cultural e artístico dos povos de Espanha e dos bens que o integram, qualquer que seja o seu regime jurídico e a sua titularidade. A lei penal sancionará os atentados contra este património.

Artigo 47.

Todos os espanhóis têm direito a disfrutar de uma habitação digna e adequada. Os poderes públicos promoverão as condições necessárias e estabelecerão as normas pertinentes para tornar efetivo este direito, regulando a utilização do solo de acordo com o interesse geral para impedir a especulação. A comunidade participará nas mais-valias geradas pela ação urbanística dos entes públicos.

Artigo 48.

Os poderes públicos promoverão as condições para a participação livre e eficaz da juventude no desenvolvimento político, social, económico e cultural.

Artigo 49.

1. As pessoas com incapacidade exercem os direitos previstos neste Título em condições de liberdade e igualdade reais e efetivas. Será regulada por lei a proteção especial que seja necessária para o referido exercício.

2. Os poderes públicos promoverão as políticas que garantam a plena autonomia pessoal e a inclusão social das pessoas com incapacidade, em termos universalmente acessíveis. Para além disto, fomentarão a participação das suas organizações, nos termos que a lei estabeleça. Serão atendidas particularmente as necessidades específicas das mulheres e dos menores com incapacidade.

Artigo 50.

Os poderes públicos garantirão, mediante pensões adequadas e periodicamente atualizadas, a suficiência económica aos cidadãos durante a terceira idade. Também, e independentemente das obrigações familiares, promoverão o seu bem-estar mediante um sistema de serviços sociais que atenderão aos seus problemas específicos de saúde, habitação, cultura e lazer.

Artigo 51.

1. Os poderes públicos garantirão a defesa dos consumidores e utilizadores, protegendo, mediante procedimentos eficazes, a segurança, a saúde e os legítimos interesses económicos dos mesmos.

2. Os poderes públicos promoverão a informação e a educação dos consumidores e utilizadores, fomentarão as suas organizações e ouvi-las-ão nas questões em que aqueles possam ser afetados, nos termos que a lei estabeleça.

3. Considerando o disposto nos números anteriores, a lei regulará o comércio interno e o regime de autorização de produtos comerciais.

§ 2 Constituição Espanhola

Artigo 52.

A lei regulará as organizações profissionais que contribuam para a defesa dos interesses económicos que lhes sejam próprios. A sua estrutura interna e funcionamento deverão ser democráticos.

CAPÍTULO IV

Das garantias das liberdades e direitos fundamentais

Artigo 53.

1. Os direitos e liberdades reconhecidos no Capítulo Segundo do presente Título vinculam todos os poderes públicos. Somente por lei, que em todo o caso deverá respeitar o seu conteúdo essencial, poderá regular-se o exercício de tais direitos e liberdades, que serão tutelados de acordo com o previsto no artigo 161, n.º 1, a).

2. Qualquer cidadão poderá reclamar a tutela das liberdades e direitos reconhecidos no artigo 14 e na Secção primeira do Capítulo segundo perante os Tribunais ordinários mediante um procedimento baseado nos princípios da preferência e da sumariedade e, se for o caso, através do recurso de amparo perante o Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicável à objeção de consciência reconhecida no artigo 30.

3. reconhecimento, o respeito e a proteção dos princípios reconhecidos no Capítulo terceiro informarão a legislação positiva, a prática judicial e a atuação dos poderes públicos. Só poderão ser alegados perante a Jurisdição ordinária de acordo com o que disponham as leis que os desenvolvam.

Artigo 54.

Uma lei orgânica regulará a instituição do Defensor do Povo, como alto comissário das Cortes Gerais, designado por estas para a defesa dos direitos compreendidos neste Título, para cujo efeito poderá supervisionar a atividade da Administração, dando conta às Cortes Gerais.

CAPÍTULO V

Da suspensão dos direitos e liberdades

Artigo 55.

1. Os direitos reconhecidos nos artigos 17, 18, números 2 e 3, artigos 19, 20, números 1, a) e d), e 5, artigos 21, 28, número 2, e artigo 37, número 2, poderão ser suspensos quando seja acordada a declaração do estado de exceção ou de sítio nos termos previstos na Constituição. Excetua-se do estabelecido anteriormente o número 3 do artigo 17 para o caso de declaração do estado de emergência.

2. Uma lei orgânica poderá determinar a forma e os casos em que, de forma individual e com a necessária intervenção judicial e o adequado controlo parlamentar, os direitos reconhecidos nos artigos 17, número 2, e 18, números 2 e 3, podem ser suspensos para pessoas determinadas, em relação com as investigações correspondentes à atuação de grupos armados ou elementos terroristas.

A utilização injustificada ou abusiva das faculdades reconhecidas na referida lei orgânica gerará a responsabilidade penal, como violação dos direitos e liberdades reconhecidos pelas leis.

§ 2 Constituição Espanhola

TÍTULO II

Da Coroa

Artigo 56.

1. O Rei é o Chefe de Estado, símbolo da sua unidade e permanência, arbitra e modera o funcionamento regular das instituições, assume a mais alta representação do Estado espanhol nas relações internacionais, especialmente com as nações da sua comunidade histórica, e exerce as funções que lhe atribuem expressamente a Constituição e as Leis.

2. O seu título é o de Rei de Espanha e poderá utilizar os demais que correspondam à Coroa.

3. A pessoa do Rei é inviolável e não está sujeita a responsabilidade. Os seus atos serão sempre referendados na forma estabelecida no artigo 64, carecendo de validade sem a referida referenda, salvo o disposto no artigo 65, número 2.

Artigo 57.

1. A Coroa de Espanha é hereditária nos sucessores de S. M. Dom Juan Carlos I de Borbón, herdeiro legítimo da dinastia histórica. A sucessão no trono seguirá a ordem regular de primogenitura e representação, sendo preferida sempre a linha anterior às posteriores; na mesma linha, o grau mais próximo ao mais remoto; no mesmo grau, o homem à mulher, e no mesmo sexo, a pessoa com mais idade à com menos.

2. O Príncipe herdeiro, desde o nascimento ou desde que se produza o facto que origine o chamamento, terá a dignidade de Príncipe das Astúrias e os demais títulos vinculados tradicionalmente ao sucessor na Coroa de Espanha.

3. Extintas todas as linhas estabelecidas em Direito, as Cortes Gerais proverão à sucessão na Coroa na forma que mais convenha aos interesses de Espanha.

4. Aquelas pessoas que, tendo direito à sucessão no trono, contraírem matrimónio contra a expressa proibição do Rei e das Cortes Gerais, ficarão excluídas da sucessão na Coroa por si próprios e pelos seus descendentes.

5. As abdições e renúncias e qualquer dúvida de facto ou de direito que ocorra na ordem de sucessão na Coroa serão resolvidas por uma lei orgânica.

Artigo 58.

A Rainha consorte ou o consorte da Rainha não poderão assumir funções constitucionais, salvo o disposto para a Regência.

Artigo 59.

1. Quando o Rei for menor de idade, o pai ou a mãe do Rei e, na sua falta, o parente mais velho mais próximo a suceder na Coroa, segundo a ordem estabelecida na Constituição, começará a exercer imediatamente a Regência e exercê-la-á durante o tempo em que o Rei for menor de idade.

2. Se o Rei ficar inabilitado para o exercício da sua autoridade e a impossibilidade for reconhecida pelas Cortes Gerais, começará a exercer imediatamente a Regência o Príncipe herdeiro da Coroa, se for maior de idade. Se não for, deverá proceder-se da forma prevista no número anterior, até que o Príncipe herdeiro alcance a maioridade.

3. Se não houver nenhuma pessoa a quem corresponda a Regência, esta será nomeada pelas Cortes Gerais, e será composta por uma, três, ou cinco pessoas.

4. Para exercer a Regência é necessário ser espanhol e maior de idade.

5. A Regência será exercida por mandato constitucional e sempre em nome do Rei.

Artigo 60.

1. Será tutor do Rei menor a pessoa que no seu testamento tenha nomeado o Rei defunto, sempre que seja maior de idade e espanhol de nascimento; se não o tiver nomeado, será tutor o pai ou a mãe enquanto permaneçam viúvos. Na sua falta, será nomeado pelas Cortes Gerais, mas não poderão acumular-se os cargos de Regente e de tutor senão no pai, mãe ou ascendentes diretos do Rei.

§ 2 Constituição Espanhola

2. O exercício da tutela é também incompatível com o de qualquer cargo ou representação política.

Artigo 61.

1. O Rei, ao ser proclamado perante as Cortes Gerais, prestará o juramento de desempenhar fielmente as suas funções, de guardar e fazer guardar a Constituição e as leis e respeitar os direitos dos cidadãos e das Comunidades Autónomas.

2. O Príncipe herdeiro, ao alcançar a maioridade, e o Regente ou Regentes ao assumirem as suas funções, prestarão o mesmo juramento, assim como o de fidelidade ao Rei.

Artigo 62.

Cabe ao Rei:

- a) Sancionar e promulgar as leis.
- b) Convocar e dissolver as Cortes Gerais e convocar eleições nos termos previstos na Constituição.
- c) Convocar referendos nos casos previstos na Constituição.
- d) Propor o candidato a Presidente do Governo e, sendo caso disso, nomeá-lo, assim como pôr fim às suas funções nos termos previstos na Constituição.
- e) Nomear e afastar os membros do Governo, sob proposta do seu Presidente.
- f) Expedir os decretos acordados no Conselho de Ministros, conferir os empregos civis e militares e conceder honras e distinções com respeito pelas leis.
- g) Ser informado dos assuntos de Estado e presidir, para este efeito, às sessões do Conselho de Ministros, quando o considere oportuno, a pedido do Presidente do Governo.
- h) O comando supremo das Forças Armadas.
- i) Exercer o direito de graça com respeito pela lei, não podendo autorizar indultos gerais.
- j) O Alto Patronato das Reais Academias.

Artigo 63.

1. O Rei acredita os embaixadores e outros representantes diplomáticos. Os representantes estrangeiros em Espanha são acreditados perante ele.

2. Cabe ao Rei manifestar o consentimento do Estado para se obrigar internacionalmente por meio de tratados, em conformidade com a Constituição e as leis.

3. Cabe ao Rei, mediante prévia autorização das Cortes Gerais, declarar a guerra e fazer a paz.

Artigo 64.

1. Os atos do Rei serão referendados pelo Presidente do Governo e, conforme o caso, pelos Ministros competentes. A proposta e a nomeação do Presidente de Governo, e a dissolução prevista no artigo 99, serão referendados pelo Presidente do Congresso.

2. Serão responsáveis pelos atos do Rei as pessoas que os referendem.

Artigo 65.

1. O Rei recebe dos Orçamentos de Estado uma quantia global para o sustento da sua Família e Casa, e distribui livremente a mesma.

2. O Rei nomeia e substitui livremente os membros civis e militares da sua Casa.

§ 2 Constituição Espanhola

TÍTULO III

Das Cortes Gerais

CAPÍTULO I

Das Câmaras

Artigo 66.

1. As Cortes Gerais representam o povo espanhol e são formadas pelo Congresso dos Deputados e pelo Senado.

2. As Cortes Gerais exercem o poder legislativo do Estado, aprovam os seus Orçamentos, controlam a ação do Governo e têm as demais competências que lhes atribua a Constituição.

3. As Cortes Gerais são invioláveis.

Artigo 67.

1. Ninguém poderá ser membro das duas Câmaras simultaneamente, nem acumular a posição numa Assembleia de Comunidade Autónoma com a de Deputado ao Congresso.

2. Os membros das Cortes Gerais não estarão vinculados por mandato imperativo.

3. As reuniões de Parlamentares que se celebrem sem convocatória regulamentar não vincularão as Câmaras, e não poderão aqueles exercer as suas funções nem ostentar os seus privilégios.

Artigo 68.

1. O Congresso é constituído por um mínimo de 300 e um máximo de 400 Deputados, eleitos por sufrágio universal, livre, igual, direto e secreto, nos termos que estabeleça a lei.

2. A circunscrição eleitoral é a província. As povoações de Ceuta e Melilla estarão representadas cada uma delas por um Deputado. A lei distribuirá o número total de Deputados, atribuindo uma representação mínima inicial a cada circunscrição e distribuindo os demais em proporção da população.

3. A eleição verificar-se-á em cada circunscrição atendendo a critérios de representação proporcional.

4. O Congresso é eleito por quatro anos. O mandato dos Deputados termina quatro anos após a sua eleição, ou no dia da dissolução da Câmara.

5. São eleitores e elegíveis todos os espanhóis que estejam no pleno uso dos seus direitos políticos.

A lei reconhecerá e o Estado facilitará o exercício do direito de sufrágio aos espanhóis que se encontrem fora do território de Espanha.

6. As eleições terão lugar entre os trinta dias e os sessenta dias desde o fim do mandato. O Congresso eleito deverá ser convocado dentro dos vinte e cinco dias seguintes à celebração das eleições.

Artigo 69.

1. O Senado é a Câmara de representação territorial.

2. Em cada província serão eleitos quatro Senadores por sufrágio universal, livre, igual, direto e secreto pelos eleitores de cada uma delas, nos termos fixados por uma lei orgânica.

3. Nas províncias insulares, cada ilha com Cabido ou Conselho Insular, constituirá uma circunscrição para efeitos de eleição de Senadores, correspondendo três a cada uma das ilhas maiores – Gran Canaria, Mallorca e Tenerife – e um a cada uma das seguintes ilhas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote e La Palma.

4. As povoações de Ceuta e Melilla elegem cada uma delas dois senadores.

5. As Comunidades Autónomas designarão ainda um Senador, e mais outro por cada milhão de habitantes do seu respetivo território. A designação caberá à Assembleia legislativa ou, na sua falta, ao órgão colegial superior da Comunidade Autónoma, de acordo

§ 2 Constituição Espanhola

com o que estabeleçam os Estatutos, que assegurarão, em todo o caso, a adequada representação proporcional.

6. O Senado é eleito por quatro anos. O mandato dos Senadores termina quatro anos após a sua eleição ou no dia da dissolução da Câmara.

Artigo 70.

1. A lei eleitoral determina as causas de inelegibilidade e incompatibilidade dos Deputados e Senadores, que incluirão, em todo o caso:

- a) Os componentes do Tribunal Constitucional.
- b) Os altos cargos da Administração do Estado determinados pela lei, com exceção dos membros do Governo.
- c) O Defensor do Povo.
- d) Os Magistrados, Juízes e Procuradores no ativo.
- e) Os militares profissionais e membros das Forças e Corpos de Segurança e Polícia no ativo.
- f) Os membros das Comissões Eleitorais.

2. A validade das atas eleitorais e credenciais dos membros de ambas as Câmaras estará submetida a controlo judicial, nos termos que estabeleça a lei eleitoral.

Artigo 71.

1. Os Deputados e Senadores gozarão de inviolabilidade pelas opiniões manifestadas no exercício das suas funções.

2. Durante o período do seu mandato, os Deputados e Senadores gozarão, igualmente de imunidade e só poderão ser detidos em caso de flagrante delito. Não podem ser acusados nem processados sem a prévia autorização da Câmara respetiva.

3. Nos processos contra Deputados e Senadores será competente o Juízo Criminal do Supremo Tribunal.

4. Os Deputados e Senadores receberão uma remuneração que será fixada pelas respetivas Câmaras.

Artigo 72.

1. As Câmaras estabelecem os seus próprios Regulamentos, aprovam autonomamente os seus orçamentos e, de comum acordo, regulam o Estatuto do Pessoal das Cortes Gerais. Os Regulamentos e a sua reforma serão submetidos a uma votação final global, que exigirá maioria absoluta.

2. As Câmaras elegem os respetivos Presidentes e os demais membros das suas Mesas. As sessões conjuntas serão presididas pelo Presidente do Congresso e reger-se-ão por um Regulamento das Cortes Gerais aprovado por maioria absoluta de cada Câmara.

3. Os Presidentes das Câmaras exercem em nome das mesmas todos os poderes administrativos e faculdades de polícia no interior das suas respetivas sedes.

Artigo 73.

1. As Câmaras reunir-se-ão anualmente em dois períodos ordinários de sessões: o primeiro, de setembro a dezembro, e o segundo, de fevereiro a junho.

2. As Câmaras poderão reunir-se em sessões extraordinárias a pedido do Governo, da Deputação Permanente ou da maioria absoluta dos membros de qualquer das Câmaras. As sessões extraordinárias deverão ser convocadas sobre uma ordem do dia determinada e serão encerradas quando esta se tenha esgotado.

Artigo 74.

1. As Câmaras reunir-se-ão em sessão conjunta para exercer as competências não legislativas que o Título II atribui expressamente às Cortes Gerais.

2. As decisões das Cortes Gerais previstas nos artigos 94 n.º1, 145 n.º 2 e 158 n.º2, serão adotadas por maioria de cada uma das Câmaras. No primeiro caso, o procedimento

§ 2 Constituição Espanhola

iniciar-se-á no Congresso, e nos outros dois, no Senado. Em ambos os casos, se não houver acordo entre o Senado e o Congresso, deverá procurar obter-se numa Comissão Mista, composta por igual número de Deputados e Senadores. A Comissão apresentará um texto que será votado por ambas as Câmaras. Se não for aprovado na forma estabelecida, decidirá o Congresso por maioria absoluta.

Artigo 75.

1. As Câmaras funcionarão em Plenário e por Comissões.
2. As Câmaras poderão delegar nas Comissões Legislativas Permanentes a aprovação de projetos ou propostas de lei. O Plenário poderá, não obstante, avocar, em qualquer momento o debate e a votação de qualquer projeto ou proposta de lei que tenha sido objeto desta delegação.
3. Exceção-se do disposto no número anterior a reforma constitucional, as questões internacionais, as leis orgânicas e de bases e os Orçamentos Gerais do Estado.

Artigo 76.

1. O Congresso e o Senado e, quando for caso disso, ambas as Câmaras em conjunto, poderão nomear Comissões de investigação sobre qualquer assunto de interesse público. As suas conclusões não serão vinculativas para os Tribunais, nem afetarão as decisões judiciais, sem prejuízo de que o resultado da investigação seja comunicado ao Ministério Público para o exercício, quando se justifique, das ações oportunas.
2. Será obrigatório comparecer a pedido das Câmaras. A lei regulará as sanções que se possam impor por incumprimento desta obrigação.

Artigo 77.

1. As Câmaras podem receber petições individuais e coletivas, sempre por escrito, ficando proibida a apresentação direta por manifestações de cidadãos.
2. As Câmaras podem remeter ao Governo as petições que recebam. O Governo está obrigado a dar explicações sobre o seu conteúdo, sempre que as Câmaras o exijam.

Artigo 78.

1. Em cada Câmara haverá uma Deputação Permanente composta por um mínimo de vinte e um membros, que representarão os grupos parlamentares, proporcionalmente à sua importância numérica.
2. As Deputações Permanentes serão presididas pelo Presidente da Câmara respetiva e terão como funções a prevista no artigo 73, a de assumir as faculdades que correspondam às Câmaras, de acordo com os artigos 86 e 116, no caso de estas terem sido dissolvidas ou se tiver expirado o seu mandato e a de velar pelos poderes das Câmaras quando estas não estejam reunidas.
3. Expirado o mandato ou em caso de dissolução, as Deputações Permanentes continuarão a exercer as suas funções até à constituição das novas Cortes Gerais.
4. Reunida a Câmara correspondente, a Deputação Permanente dará conta dos assuntos tratados e das suas decisões.

Artigo 79.

1. Para adotarem acordos, as Câmaras devem reunir-se de forma regulamentar e com a assistência da maioria dos seus membros.
2. Os ditos acordos, para serem válidos, deverão ser aprovados pela maioria dos membros presentes, sem prejuízo das maiorias especiais que estabeleçam a Constituição ou as leis orgânicas e as que para a eleição de pessoas sejam estabelecidas pelos Regulamentos das Câmaras.
3. O voto de Senadores e Deputados é pessoal e indelegável.

Artigo 80.

As sessões plenárias das Câmaras serão públicas, salvo acordo em contrário de cada Câmara, adotado por maioria absoluta ou com observância do Regulamento.

CAPÍTULO II

Da elaboração das leis**Artigo 81.**

1. São leis orgânicas as relativas ao desenvolvimento dos direitos fundamentais e das liberdades públicas, as que aprovem os Estatutos de Autonomia e o regime eleitoral geral e as demais previstas na Constituição.

2. A aprovação, modificação ou derrogação das leis orgânicas exigirá maioria absoluta do Congresso, numa votação final sobre o conjunto do projeto.

Artigo 82.

1. As Cortes Gerais poderão delegar no Governo o poder de ditar normas com valor de lei sobre matérias determinadas não incluídas no artigo anterior.

2. A delegação legislativa deverá ser outorgada mediante uma lei de bases quando o seu objeto seja a formação de textos articulados ou por uma lei ordinária quando se trate de refundir vários textos legais num só.

3. A delegação legislativa deverá ser outorgada ao Governo de forma expressa para matéria concreta e com fixação de prazo para o seu exercício. A delegação esgota-se pelo uso que dela faça o Governo mediante a publicação da norma correspondente. Não poderá considerar-se concedida de modo implícito ou por tempo indeterminado. Tão-pouco poderá permitir a subdelegação em autoridades distintas do próprio Governo.

4. As leis de bases delimitarão com precisão o objeto e o alcance da delegação legislativa e os princípios e critérios que devem ser seguidos no seu exercício.

5. A autorização para refundir textos legais determinará o âmbito normativo a que se refere o conteúdo da delegação, especificando se se circunscreve à mera formulação de um texto único ou se se inclui a de regularizar, clarificar e harmonizar os textos legais a refundir.

6. Sem prejuízo da competência própria dos Tribunais, as leis de delegação poderão estabelecer em cada caso fórmulas adicionais de controlo.

Artigo 83.

As leis de bases não poderão, em nenhum caso:

- a) Autorizar a modificação da própria lei de bases.
- b) Permitir ditar normas com carácter retroativo.

Artigo 84.

Quando uma proposta de lei ou uma emenda for contrária a uma delegação legislativa em vigor, o Governo tem a faculdade de se opor à sua tramitação. Nesse caso, poderá apresentar-se uma proposta de lei para a derrogação total ou parcial da lei de delegação.

Artigo 85.

As disposições do Governo que contenham legislação delegada recebem o nome de Decretos Legislativos.

Artigo 86.

1. Em caso de extraordinária e urgente necessidade, o Governo poderá adotar disposições legislativas provisórias que tomarão a forma de Decretos-leis e que não poderão afetar o ordenamento das instituições básicas do Estado, os direitos, deveres e liberdades dos cidadãos regulados no Título I, o regime das Comunidades Autónomas, nem o Direito eleitoral geral.

§ 2 Constituição Espanhola

2. Os Decretos-leis deverão ser imediatamente submetidos a debate e votação global do Congresso dos Deputados, convocado para o efeito se não estiver reunido, no prazo dos trinta dias seguintes à sua promulgação. O Congresso terá que se pronunciar expressamente dentro do referido prazo sobre a sua convalidação ou derrogação, para o que o Regulamento estabelecerá um procedimento especial e sumário.

3. Durante o prazo estabelecido no número anterior, as Cortes poderão tramitá-los como projetos de lei pelo procedimento de urgência.

Artigo 87.

1. A iniciativa legislativa corresponde ao Governo, ao Congresso e ao Senado, de acordo com a Constituição e os Regulamentos das Câmaras.

2. As Assembleias das Comunidades Autónomas poderão solicitar ao Governo a adoção de um projeto de lei ou enviar à Mesa do Congresso uma proposta de lei, apresentando perante a referida Câmara um máximo de três membros da Assembleia encarregues da sua defesa.

3. Uma lei orgânica regulará as formas de exercício e os requisitos da iniciativa popular para a apresentação de propostas de lei. Em todo o caso serão exigidas não menos de 500.000 assinaturas reconhecidas. Não procederá a referida iniciativa se incidir sobre matérias próprias de lei orgânica, tributárias ou de carácter internacional, nem no que respeita à prerrogativa de graça.

Artigo 88.

Os projetos de lei serão aprovados em Conselho de Ministros, que os submeterá ao Congresso, acompanhados de uma exposição de motivos e dos antecedentes necessários para se pronunciar sobre eles.

Artigo 89.

1. A tramitação das propostas de lei será regulada pelos Regulamentos das Câmaras, sem que a prioridade devida aos projetos de lei impeça o exercício da iniciativa legislativa nos termos regulados pelo artigo 87.

2. As propostas de lei que, de acordo com o artigo 87, o Senado tome em consideração, serão remetidas ao Congresso para que sejam tramitadas neste tal como proposto.

Artigo 90.

1. Uma vez aprovado um projeto de lei ordinária ou orgânica pelo Congresso dos Deputados, o seu Presidente dará imediatamente conta do mesmo ao Presidente do Senado, o qual o submeterá à deliberação deste.

2. O Senado no prazo de dois meses, a partir do dia da receção do texto, pode, mediante mensagem fundamentada, opor o seu veto ou introduzir emendas ao mesmo. O veto deverá ser aprovado por maioria absoluta. O projeto não poderá ser submetido ao Rei para sanção sem que o Congresso ratifique por maioria absoluta, em caso de veto, o texto inicial, ou por maioria simples, uma vez decorridos dois meses desde a interposição do mesmo, ou se pronuncie sobre as emendas, aceitando-as ou não por maioria simples.

3. O prazo de dois meses de que o Senado dispõe para vetar ou emendar o projeto, reduzir-se-á para vinte dias de calendário nos projetos declarados urgentes pelo Governo ou pelo Congresso dos Deputados.

Artigo 91.

O Rei sancionará no prazo de quinze dias as leis aprovadas pelas Cortes Gerais, e promulgá-las-á e ordenará a sua imediata publicação.

Artigo 92.

1. As decisões políticas de especial transcendência poderão ser submetidas a referendo consultivo de todos os cidadãos.

§ 2 Constituição Espanhola

2. O referendo é convocado pelo Rei, mediante proposta do Presidente do Governo, previamente autorizada pelo Congresso dos Deputados.

3. Uma lei orgânica regulará as condições e o procedimento das diferentes modalidades de referendo previstas na Constituição.

CAPÍTULO III

Dos Tratados Internacionais

Artigo 93.

Mediante lei orgânica, poderá autorizar-se a celebração de tratados pelos quais se atribua a uma organização ou instituição internacional o exercício de competências derivadas da Constituição. Cabe às Cortes Gerais ou ao Governo, conforme os casos, a garantia do cumprimento destes tratados e das resoluções emanadas dos organismos internacionais ou supranacionais titulares da cessão.

Artigo 94.

1. A prestação do consentimento do Estado para se obrigar por meio de tratados ou convénios requererá a prévia autorização das Cortes Gerais, nos seguintes casos:

- a) Tratados de carácter político.
- b) Tratados ou convénios de carácter militar.
- c) Tratados ou convénios que afetem a integridade territorial do Estado ou os direitos e deveres fundamentais estabelecidos no Título I.
- d) Tratados ou convénios que impliquem obrigações financeiras para o Erário Público.
- e) Tratados ou convénios que suponham modificação ou derrogação de alguma lei ou exijam medidas legislativas para a sua execução.

2. O Congresso e o Senado serão imediatamente informados da conclusão dos restantes tratados ou convénios.

Artigo 95.

1. A celebração de um tratado internacional que contenha disposições contrárias à Constituição exigirá uma prévia revisão constitucional.

2. O Governo ou qualquer uma das Câmaras pode requerer ao Tribunal Constitucional que declare se existe ou não essa contradição.

Artigo 96.

1. Os tratados internacionais validamente celebrados, uma vez publicados oficialmente em Espanha, formarão parte do ordenamento interno. As suas disposições só poderão ser derogadas, modificadas ou suspensas na forma prevista nos próprios tratados ou de acordo com as normas gerais do Direito internacional.

2. Para a denúncia dos tratados e convénios internacionais utilizar-se-á o mesmo procedimento previsto para a sua aprovação no artigo 94.

TÍTULO IV

Do Governo e da Administração

Artigo 97.

O Governo dirige a política interna e externa, a Administração civil e militar e a defesa do Estado. Exerce a função executiva e o poder regulamentar de acordo com a Constituição e as leis.

§ 2 Constituição Espanhola

Artigo 98.

1. O Governo é composto pelo Presidente, pelos Vice-presidentes se for o caso, pelos Ministros e pelos demais membros que estabelece a lei.

2. O Presidente dirige a ação do Governo e coordena as funções dos demais membros do mesmo, sem prejuízo da competência e responsabilidade direta destes na sua gestão.

3. Os membros do Governo não poderão exercer outras funções representativas para além das que são próprias do mandato parlamentar, nem qualquer outra função pública que não derive do seu cargo, nem qualquer atividade profissional ou mercantil.

4. A lei regulará o estatuto e as incompatibilidades dos membros do Governo.

Artigo 99.

1. Após cada renovação do Congresso dos Deputados, e nas demais situações constitucionais em que tal proceda, o Rei, com prévia consulta dos representantes designados pelos Grupos políticos com representação parlamentar, e através do Presidente do Congresso, proporá um candidato à Presidência do Governo.

2. O candidato proposto conforme previsto no número anterior exporá perante o Congresso de Deputados o programa político do Governo que pretenda formar e solicitará a confiança da Câmara.

3. Se o Congresso dos Deputados, com o voto da maioria absoluta dos seus membros, der a sua confiança ao citado candidato, o Rei nomeá-lo-á Presidente. Se a referida maioria não for alcançada, deverá submeter-se a mesma proposta a nova votação quarenta e oito horas depois da anterior, e a confiança considerar-se-á concedida se obtiver maioria simples.

4. Se efetuadas as referidas votações não for concedida a confiança para a investidura, serão tramitadas sucessivas propostas na forma prevista nos números anteriores.

5. Se decorrido o prazo de dois meses, a partir da primeira votação de investidura, nenhum candidato tiver obtido a confiança do Congresso, o Rei dissolverá ambas as Câmaras e convocará novas eleições com a referenda do Presidente do Congresso.

Artigo 100.

Os demais membros do Governo serão designados e afastados pelo Rei, sob proposta do seu Presidente.

Artigo 101.

1. O Governo cessa na sequência da celebração de eleições gerais, nos casos de perda da confiança parlamentar previstos na Constituição, ou por demissão ou falecimento do seu Presidente.

2. O Governo cessante continuará em funções até à tomada de posse do novo Governo.

Artigo 102.

1. A responsabilidade criminal do Presidente e dos demais membros do Governo será exigível, quando exista, perante o Juízo Criminal do Supremo Tribunal.

2. Se a acusação for por traição ou por qualquer delito contra a segurança do Estado no exercício das suas funções, só poderá ser apresentada por iniciativa de um quarto dos membros do Congresso, e com a aprovação da maioria absoluta do mesmo.

3. A prerrogativa real de graça não será aplicável a nenhum dos casos do presente artigo.

Artigo 103.

1. A Administração Pública serve com objetividade os interesses gerais e atua de acordo com os princípios da eficácia, hierarquia, descentralização, desconcentração e coordenação, com plena submissão à lei e ao Direito.

2. Os órgãos da Administração do Estado são criados, regidos e coordenados de acordo com a lei.

§ 2 Constituição Espanhola

3. A lei regulará o estatuto dos funcionários públicos, o acesso à função pública de acordo com os princípios do mérito e capacidade, as peculiaridades do exercício do seu direito à sindicalização, o sistema de incompatibilidades e as garantias para a imparcialidade no exercício das suas funções.

Artigo 104.

1. As Forças e os Corpos de segurança, sob a dependência do Governo, terão como missão proteger o livre exercício dos direitos e liberdades e garantir a segurança dos cidadãos.

2. Uma lei orgânica determinará as funções, os princípios básicos de atuação e os estatutos das Forças e Corpos de segurança.

Artigo 105.

A lei regulará:

a) A audiência dos cidadãos, diretamente ou através das organizações e associações reconhecidas pela lei, no procedimento de elaboração das disposições administrativas que os afetem.

b) O acesso dos cidadãos aos arquivos e registos administrativos, salvo quando afete a segurança e defesa do Estado, a averiguação de delitos e a intimidade das pessoas.

c) O procedimento através do qual devem produzir-se os atos administrativos, garantindo, quando aplicável, a audiência do interessado.

Artigo 106.

1. Os Tribunais controlam o poder regulamentar e a legalidade da atuação administrativa, bem como a vinculação desta aos fins que a justificam.

2. Os particulares, nos termos estabelecidos por lei, terão direito a ser indemnizados por toda a lesão que sofram em quaisquer dos seus bens e direitos, salvo nos casos de força maior, sempre que a lesão seja consequência do funcionamento dos serviços públicos.

Artigo 107.

O Conselho de Estado é o supremo órgão consultivo do Governo. Uma lei orgânica regulará a sua composição e competência.

TÍTULO V

Das relações entre o Governo e as Cortes Gerais

Artigo 108.

O Governo responde solidariamente pela sua gestão política perante o Congresso dos Deputados.

Artigo 109.

As Câmaras e as suas Comissões poderão recolher, através dos seus Presidentes, a informação e ajuda que precisem do Governo e dos seus Departamentos e de quaisquer autoridades do Estado e das Comunidades Autónomas.

Artigo 110.

1. As Câmaras e as suas Comissões podem reclamar a presença dos membros do Governo.

2. Os membros do Governo têm acesso às sessões das Câmaras e às suas Comissões e a faculdade de se fazer ouvir nelas, e poderão solicitar que prestem informações perante as mesmas funcionários dos seus Departamentos.

§ 2 Constituição Espanhola

Artigo 111.

1. O Governo e cada um dos seus membros estão sujeitos às interpelações e perguntas que lhes sejam formuladas nas Câmaras. Para esta classe de debate os Regulamentos estabelecerão um tempo mínimo semanal.

2. Toda a interpelação pode dar lugar a uma moção em que a Câmara manifeste a sua posição.

Artigo 112.

O Presidente do Governo, mediante prévia deliberação do Conselho de Ministros, pode colocar perante o Congresso dos Deputados a questão da confiança sobre o seu programa ou sobre uma declaração de política geral. A confiança será considerada concedida quando vote a seu favor a maioria simples dos Deputados.

Artigo 113.

1. O Congresso dos Deputados pode exigir a responsabilidade política do Governo mediante a adoção por maioria absoluta da moção de censura.

2. A moção de censura deverá ser proposta pelo menos por um décimo dos Deputados, e deverá incluir um candidato à Presidência do Governo.

3. A moção de censura não poderá ser votada até que decorram cinco dias desde a sua apresentação. Nos dois primeiros dias do referido prazo poderão ser apresentadas moções alternativas.

4. Se a moção de censura não for aprovada pelo Congresso, os seus signatários não poderão apresentar outra durante o mesmo período de sessões.

Artigo 114.

1. Se o Congresso negar a sua confiança ao Governo, este apresentará a sua demissão ao Rei, procedendo-se em seguida à designação do Presidente do Governo, segundo o disposto no artigo 99.

2. Se o Congresso adotar uma moção de censura, o Governo apresentará a sua demissão ao Rei e o candidato incluído naquela será considerado investido de confiança da Câmara para os efeitos previstos no artigo 99. O Rei nomeá-lo-á Presidente do Governo.

Artigo 115.

1. O Presidente do Governo, mediante prévia deliberação do Conselho de Ministros, e sob sua exclusiva responsabilidade, poderá propor a dissolução do Congresso, do Senado ou das Cortes Gerais, que será decretada pelo Rei. O decreto de dissolução fixará a data das eleições.

2. A proposta de dissolução não poderá ser apresentada quando estiver em tramitação uma moção de censura.

3. Não poderá haver nova dissolução antes que decorra um ano desde a anterior, salvo o disposto no artigo 99, número 5.

Artigo 116.

1. Uma lei orgânica regulará os estados de alarme, de exceção e de sítio, e as competências e limitações correspondentes.

2. O estado de alarme será declarado pelo Governo mediante decreto acordado em Conselho de Ministros por um prazo máximo de quinze dias, dando conta ao Congresso dos Deputados, reunido imediatamente para o efeito e sem cuja autorização não poderá ser prorrogado o referido prazo. O decreto determinará o âmbito territorial de aplicação dos efeitos da declaração.

3. O estado de exceção será declarado pelo Governo mediante decreto acordado em Conselho de Ministros, mediante prévia autorização do Congresso dos Deputados. A autorização e proclamação do estado de exceção deverá determinar expressamente os efeitos do mesmo, o âmbito territorial de aplicação e a sua duração, que não poderá exceder trinta dias, prorrogáveis por outro prazo igual, com os mesmos requisitos.

§ 2 Constituição Espanhola

4. O estado de sítio será declarado pela maioria absoluta do Congresso dos Deputados, sob proposta exclusiva do Governo. O Congresso determinará o seu âmbito territorial, duração e condições.

5. Não se poderá proceder à dissolução do Congresso enquanto estiverem declarados alguns dos estados compreendidos no presente artigo, ficando automaticamente convocadas as Câmaras se não estiverem em período de sessões. O seu funcionamento, assim como o dos restantes poderes constitucionais dos Estado, não poderá ser interrompido durante a vigência destes estados.

Dissolvido o Congresso ou esgotado o seu mandato, se se produzir alguma das situações que dão lugar a qualquer dos referidos estados, as competências do Congresso serão assumidas pela sua Deputação Permanente

6. A declaração dos estados alarme, de exceção e de sítio não modificarão o princípio da responsabilidade do Governo e dos seus agentes reconhecidos na Constituição e nas leis.

TÍTULO VI

Do Poder Judicial

Artigo 117.

1. A justiça emana do povo e é administrada em nome do Rei por Juízes e Magistrados integrantes do poder judicial, independentes, inamovíveis, responsáveis e sujeitos unicamente ao império da lei.

2. Os Juízes e Magistrados não poderão ser afastados, suspensos, transferidos nem jubilados, senão por alguma das causas e com as garantias previstas na lei.

3. O exercício do poder jurisdicional em todo o tipo de processos, julgando e fazendo executar o julgado, corresponde exclusivamente aos Julgados e Tribunais determinados pelas leis, segundo as normas de competência e procedimento que estas estabeleçam.

4. Os Julgados e Tribunais não exercerão mais funções do que as referidas no número anterior e do que aquelas que expressamente lhes sejam atribuídas por lei em garantia de qualquer direito.

5. O princípio da unidade jurisdicional é a base da organização e funcionamento dos Tribunais. A lei regulará o exercício da jurisdição militar no âmbito estritamente castrense e nos casos de estado de sítio, de acordo com os princípios da Constituição.

6. São proibidos os Tribunais de exceção.

Artigo 118.

É obrigatório cumprir as sentenças e as demais decisões firmes dos Juízes e Tribunais, bem como prestar a colaboração requerida por estes no curso do processo e na execução do que for resolvido.

Artigo 119.

A justiça será gratuita quando assim o disponha a lei e, em todo o caso, relativamente àqueles que comprovem ter insuficiência de recursos para litigar.

Artigo 120.

1. As atuações judiciais são públicas, com as exceções que prevejam as leis de procedimento.

2. O procedimento será predominantemente oral, sobretudo em matéria criminal.

3. As sentenças serão sempre fundamentadas e serão pronunciadas em audiência pública.

Artigo 121.

Os danos causados por erro judicial, assim como os que sejam consequência do funcionamento anormal da Administração da Justiça, darão direito a uma indemnização a cargo do Estado, conforme à lei.

§ 2 Constituição Espanhola

Artigo 122.

1. A lei orgânica do poder judicial determinará a constituição, funcionamento e governo dos Julgados e Tribunais, assim como o estatuto jurídico dos Juízes e Magistrados de carreira, que formarão um Corpo único, e do pessoal ao serviço da Administração da Justiça.

2. O Conselho Geral do Poder Judicial é o órgão de governo do mesmo. A lei orgânica estabelecerá o seu estatuto e o regime de incompatibilidade dos seus membros e as suas funções, em particular em matéria de nomeações, promoções, inspeção e regime disciplinar.

3. O Conselho Geral do Poder Judicial será integrado pelo Presidente do Supremo Tribunal, que presidirá, e por vinte membros nomeados pelo Rei por um período de cinco anos. Destes, doze entre Juízes e Magistrados de todas as categorias judiciais, nos termos que estabeleça a lei orgânica; quatro sob proposta do Congresso dos Deputados, e quatro sob proposta do Senado, eleitos em ambos os casos por maioria de três quintos dos seus membros, entre advogados e outros juristas, todos eles de reconhecida competência e com mais de quinze anos de exercício da sua profissão.

Artigo 123.

1. O Supremo Tribunal, com jurisdição em toda a Espanha, é o órgão jurisdicional superior em todas as ordens, salvo o disposto em matéria de garantias constitucionais.

2. O Presidente do Supremo Tribunal será nomeado pelo Rei, sob proposta do Conselho Geral do Poder Judicial, na forma que determine a lei.

Artigo 124.

1. O Ministério Público, sem prejuízo das funções confiadas a outros órgãos, tem por missão promover a ação da justiça em defesa da legalidade, dos direitos dos cidadãos e do interesse público tutelado pela lei, oficiosamente ou a pedido dos interessados, assim como velar pela independência dos Tribunais e procurar perante estes a satisfação do interesse social.

2. O Ministério Público exerce as suas funções por meio de órgãos próprios e em conformidade com os princípios da unidade de atuação e dependência hierárquica e com sujeição, em todo o caso, aos da legalidade e imparcialidade.

3. A lei regulará o estatuto orgânico do Ministério Público.

4. O Procurador-Geral do Estado será nomeado pelo Rei, sob proposta do Governo, ouvido o Conselho Geral do Poder Judicial.

Artigo 125.

Os cidadãos poderão exercer a ação popular e participar na Administração da Justiça através da instituição do Júri, na forma e relativamente àqueles processos penais que a lei determine, bem como nos Tribunais consuetudinários e tradicionais.

Artigo 126.

A polícia judicial depende dos Juízes, dos Tribunais e do Ministério Público nas suas funções de averiguação do delito e descoberta e detenção do delinquente, nos termos estabelecidos pela lei.

Artigo 127.

1. Os Juízes e Magistrados assim como os Procuradores, enquanto estiverem no ativo, não poderão desempenhar outros cargos públicos, nem pertencer a partidos políticos ou sindicatos. A lei estabelecerá o sistema e as modalidades de associação profissional dos Juízes, Magistrados e Procuradores.

2. A lei estabelecerá o regime de incompatibilidades dos membros do poder judicial, que deverá assegurar a sua total independência.

TÍTULO VII

Economia e Finanças**Artigo 128.**

1. Toda a riqueza do país nas suas diferentes formas e seja qual for a sua titularidade está subordinada ao interesse geral.

2. É reconhecida a iniciativa pública na atividade económica. Mediante a lei poderá reservar-se para o sector público recursos ou serviços essenciais, especialmente em caso de monopólio e também permitir-se a intervenção de empresas quando assim o exija o interesse geral.

Artigo 129.

1. A lei estabelecerá as formas de participação dos interessados na Segurança Social e na atividade dos organismos públicos cuja função afete diretamente a qualidade de vida ou o bem-estar geral.

2. Os poderes públicos promoverão com eficácia as diversas formas de participação na empresa, e fomentarão, através de legislação adequada, as sociedades cooperativas. Também estabelecerão os meios que facilitem o acesso dos trabalhadores à propriedade dos meios de produção.

Artigo 130.

1. Os poderes públicos atenderão à modernização e desenvolvimento de todos os setores económicos e, em particular, da agricultura, da pecuária, da pesca e do artesanato, com o objetivo de equiparar o nível de vida de todos os espanhóis.

2. Com o mesmo objetivo, dispensar-se-á um tratamento especial às zonas de montanha.

Artigo 131.

1. O Estado, mediante lei, poderá planificar a atividade económica geral para atender às necessidades coletivas, equilibrar e harmonizar o desenvolvimento regional e setorial e estimular o crescimento dos rendimentos e da riqueza e a sua mais justa distribuição.

2. O Governo elaborará os projetos de planificação, de acordo com as previsões que lhe sejam fornecidas pelas Comunidades Autónomas e a assessoria e colaboração dos sindicatos e outras organizações profissionais, empresariais e económicas. Para isso será constituído um Conselho, cuja composição e funções serão desenvolvidas por lei.

Artigo 132.

1. A lei regulará o regime jurídico dos bens de domínio público e dos comunais, inspirando-se nos princípios da inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade, assim como a sua desafetação.

2. São bens de domínio público estatal os que determine a lei e, em todo o caso, a zona marítimo-terrestre, as praias, o mar territorial e os recursos naturais da zona económica e a plataforma continental.

3. Por lei serão regulados o Património do Estado e o Património Nacional, a sua administração, defesa e conservação.

Artigo 133.

1. O poder originário para estabelecer os impostos corresponde exclusivamente ao Estado, através de lei.

2. As Comunidades Autónomas e as Corporações locais poderão estabelecer e exigir impostos, de acordo com a Constituição e as leis.

3. Todo o benefício fiscal que afete os impostos do Estado deverá ser estabelecido por lei.

§ 2 Constituição Espanhola

4. As administrações públicas só poderão contrair obrigações financeiras e realizar gastos de acordo com as leis.

Artigo 134.

1. Cabe ao Governo a elaboração dos Orçamentos Gerais do Estado e às Cortes Gerais, a sua análise, emenda e aprovação.

2. Os Orçamentos Gerais do Estado terão carácter anual, incluirão a totalidade das despesas e receitas do setor público estatal e neles ficará consignado o montante dos benefícios fiscais que afetem os impostos do Estado.

3. O Governo deverá apresentar perante o Congresso dos Deputados os Orçamentos Gerais do Estado, pelo menos três meses antes de expirarem os do ano anterior.

4. Se a Lei de Orçamentos não for aprovada antes do primeiro dia do exercício económico correspondente, considerar-se-ão automaticamente prorrogados os Orçamentos do exercício anterior até à aprovação dos novos.

5. Aprovados os Orçamentos Gerais do Estado, o Governo poderá apresentar projetos de lei que impliquem um aumento das despesas públicas ou diminuição das receitas correspondentes ao mesmo exercício orçamental.

6. Toda a proposta ou emenda que implique aumento das despesas ou diminuição das receitas orçamentais requererá a concordância do Governo para a sua tramitação.

7. A Lei de Orçamentos não pode criar impostos. Pode modificá-los quando uma lei tributária substantiva assim o preveja.

Artigo 135.

1. Todas as Administrações Públicas adequarão as suas atuações ao princípio da estabilidade orçamental.

2. O Estado e as Comunidades Autónomas não poderão incorrer num défice estrutural que supere os limites estabelecidos, se for o caso, pela União Europeia para os Estados-Membros.

Uma lei orgânica fixará o défice estrutural máximo permitido ao Estado e às Comunidades Autónomas, com referência ao seu produto interno bruto. As Entidades Locais deverão apresentar equilíbrio orçamental.

3. O Estado e as Comunidades Autónomas deverão estar autorizados por lei para emitir dívida pública ou contrair crédito.

As dotações para satisfazer os juros e o capital da dívida pública das Administrações considerar-se-ão sempre incluídas no conjunto das despesas dos seus orçamentos e o seu pagamento gozará de prioridade absoluta. Estas dotações não poderão ser objeto de emenda ou modificação, enquanto se ajustem às condições da lei de emissão.

O volume de dívida pública do conjunto das Administrações Públicas em relação com o produto interno bruto do Estado não poderá superar o valor de referência estabelecido no Tratado de Funcionamento da União Europeia.

4. Os limites de défice estrutural e de volume de dívida pública só poderão ser ultrapassados em caso de catástrofes naturais, recessão económica ou situações de emergência extraordinária que escapem ao controlo do Estado e prejudiquem consideravelmente a situação financeira ou a sustentabilidade económica ou social do Estado, reconhecidas pela maioria absoluta dos membros do Congresso dos Deputados.

5. Uma lei orgânica desenvolverá os princípios a que se refere este artigo assim como a participação, nos procedimentos respetivos, dos órgãos de coordenação institucional entre as Administrações Públicas em matéria de política fiscal e financeira. Em todo o caso, regulará:

a) A distribuição dos limites do défice e da dívida entre as diferentes Administrações Públicas, os casos excecionais de superação dos mesmos e a forma e o prazo para a correção dos desvios que sobre um e o outro se possam produzir.

b) A metodologia e o procedimento para o cálculo do défice estrutural.

c) A responsabilidade de cada Administração Pública em caso de incumprimento dos objetivos de estabilidade orçamental.

§ 2 Constituição Espanhola

6. As Comunidades Autónomas, de acordo com os respetivos Estatutos e dentro dos limites a que se refere este artigo, adotarão as disposições necessárias para a aplicação efetiva do princípio da estabilidade nas suas normas e decisões orçamentais.

Artigo 136.

1. O Tribunal de Contas é o supremo órgão fiscalizador das contas e da gestão económica do Estado, assim como do setor público.

Dependerá diretamente das Cortes Gerais e exercerá as suas funções por delegação delas na análise e comprovação da Conta Geral do Estado

2. As contas do Estado e do setor público estatal serão entregues ao Tribunal de Contas e serão controladas por este.

O Tribunal de Contas, sem prejuízo da sua própria jurisdição, remeterá às Cortes Gerais uma informação anual na qual, quando se justifique, comunicará as infrações ou responsabilidades em que, em seu juízo, se tenha incorrido.

3. Os membros do Tribunal de Contas gozarão da mesma independência e inamovibilidade e estão sujeitos às mesmas incompatibilidades que os Juízes.

4. Uma lei orgânica regulará a composição, organização e funções do Tribunal de Contas.

TÍTULO VIII

Da Organização Territorial do Estado

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 137.

O Estado organiza-se territorialmente em municípios, em províncias e nas Comunidades Autónomas que se constituam. Todas estas entidades gozam de autonomia para a gestão dos seus respetivos interesses.

Artigo 138.

1. O Estado garante a realização efetiva do princípio da solidariedade consagrado no artigo 2 da Constituição, velando pelo estabelecimento de um equilíbrio económico, adequado e justo entre as diversas partes do território espanhol, e atendendo em particular às circunstâncias da insularidade.

2. As diferenças entre os Estatutos das diferentes Comunidades Autónomas não poderão implicar, em nenhum caso, privilégios económicos ou sociais.

Artigo 139.

1. Todos os espanhóis têm os mesmos direitos e obrigações em qualquer parte do território do Estado.

2. Nenhuma autoridade poderá adotar medidas que direta ou indiretamente obstaculizem a liberdade de circulação e estabelecimento das pessoas e a livre circulação de bens em todo o território espanhol.

CAPÍTULO II

Da Administração Local

Artigo 140.

A Constituição garante a autonomia dos municípios. Estes gozarão de personalidade jurídica plena. O seu governo e administração cabe aos seus respetivos Ajuntamentos, integrados por Alcaldes e Conselheiros. Os Conselheiros serão eleitos pelos munícipes

§ 2 Constituição Espanhola

através de sufrágio universal, igual, livre, direto e secreto, na forma estabelecida por lei. Os Alcaldes serão eleitos pelos Conselheiros ou pelos moradores. A lei regulará as condições em que convenha o regime do conselho aberto.

Artigo 141.

1. A província é uma entidade local com personalidade jurídica própria, determinada pelo agrupamento de municípios e uma divisão territorial para o cumprimento das atividades do Estado. Qualquer alteração dos limites provinciais deverá ser aprovada pelas Cortes Gerais mediante de lei orgânica.

2. O governo e a administração autónoma das províncias serão entregues a Deputações ou outras Corporações de carácter representativo.

3. Poderão ser criados agrupamentos de municípios diferentes da província.

4. Nos arquipélagos, as ilhas terão a sua administração própria em forma de Cabidos ou Conselhos.

Artigo 142.

As Finanças locais deverão dispor dos meios suficientes para o desempenho das funções que a lei atribui às Corporações respetivas e sustentar-se-ão fundamentalmente em impostos próprios e na participação nos do Estado e das Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO III

Das Comunidades Autónomas

Artigo 143.

1. No exercício do direito à autonomia, reconhecido no artigo 2 da Constituição, as províncias limítrofes com características históricas, culturais e económicas comuns, os territórios insulares e as províncias com identidade regional histórica poderão aceder ao seu autogoverno e constituir-se em Comunidades Autónomas, com respeito pelo previsto neste Título e nos respetivos Estatutos.

2. A iniciativa do processo autonómico cabe a todas as Deputações interessadas ou ao órgão interinsular correspondente e a dois terços dos municípios cuja população represente, pelo menos, a maioria do censo eleitoral de cada província ou ilha. Estes requisitos deverão ser cumpridos no prazo de seis meses contados desde o primeiro acordo adotado a este respeito por alguma das Corporações locais interessadas.

3. A iniciativa, caso não tenha sucesso, só poderá repetir-se passados cinco anos.

Artigo 144.

As Cortes Gerais, mediante lei orgânica, poderão, por motivos de interesse nacional:

a) Autorizar a constituição de uma comunidade autónoma quando o seu âmbito territorial não ultrapasse o de uma província e não reúna as condições do número 1 do artigo 143.

b) Autorizar ou aprovar, casuisticamente, um Estatuto de autonomia para territórios que não estejam integrados na organização provincial.

c) Substituir a iniciativa das Corporações locais a que se refere o número 2 do artigo 143.

Artigo 145.

1. Em nenhum caso se admitirá a federação de Comunidades Autónomas.

2. Os Estatutos poderão prever os casos, requisitos e termos em que as Comunidades Autónomas poderão celebrar acordos entre si para a gestão e prestação de serviços próprios destas, assim como o carácter e os efeitos da correspondente comunicação às Cortes Gerais. Nos demais casos, os acordos de cooperação entre as Comunidades Autónomas necessitam da autorização das Cortes Gerais.

§ 2 Constituição Espanhola

Artigo 146.

O projeto de Estatuto será elaborado por uma assembleia composta pelos membros da Deputação ou órgão interinsular das províncias em causa e pelos Deputados e Senadores nelas eleitos e será enviado às Cortes Gerais para sua tramitação como lei.

Artigo 147.

1. Dentro dos termos da presente Constituição, os Estatutos serão a norma institucional básica de cada Comunidade Autónoma e o Estado reconhecê-los-á e protegê-los-á como parte integrante do seu ordenamento jurídico.

2. Os Estatutos de autonomia deverão conter:

- a) A denominação da Comunidade que melhor corresponda à sua identidade histórica.
- b) A delimitação do seu território.
- c) A denominação, organização e sede das instituições autónomas próprias.
- d) As competências assumidas dentro do quadro estabelecido na Constituição e as bases para a transferência dos serviços correspondentes às mesmas.

3. A reforma dos Estatutos deverá ajustar-se ao procedimento neles estabelecido e requererá, em todo o caso, a aprovação pelas Cortes Gerais, mediante lei orgânica.

Artigo 148.

1. As Comunidades Autónomas poderão assumir competências nas seguintes matérias:

- 1.^a Organização das suas instituições de autogoverno.
- 2.^a Alteração dos limites dos municípios compreendidos no seu território e, em geral, as funções que caibam à Administração do Estado sobre as Corporações locais e cuja transferência seja autorizada pela legislação sobre Regime Local.
- 3.^a Ordenamento do território, urbanismo e habitação.
- 4.^a Obras públicas de interesse da Comunidade Autónoma no seu próprio território.
- 5.^a Caminhos de ferro e estradas cujo itinerário se desenvolva integralmente no território da Comunidade Autónoma e, nos mesmos termos, o transporte realizado por estes meios ou por cabo.
- 6.^a Os portos de abrigo, os portos e aeroportos desportivos e, em geral, os que não desenvolvam atividades comerciais.
- 7.^a A agricultura e a pecuária, de acordo com a ordenação geral da economia.
- 8.^a Os montes e aproveitamentos florestais.
- 9.^a A gestão em matéria de proteção do meio ambiente.
- 10.^a Os projetos, construção e exploração dos aproveitamentos hidráulicos, canais e sistemas de rega de interesse da Comunidade Autónoma; as águas minerais e termais.
- 11.^a A pesca em águas interiores, a cultura de marisco e a aquicultura, a caça e a pesca fluvial.
- 12.^a Feiras locais.
- 13.^a O fomento do desenvolvimento económico da Comunidade Autónoma dentro dos objetivos estabelecidos pela política económica nacional.
- 14.^a O artesanato.
- 15.^a Museus, bibliotecas e conservatórios de música de interesse para a Comunidade Autónoma.
- 16.^a Património monumental de interesse da Comunidade Autónoma.
- 17.^a O fomento da cultura, da investigação e, quando for caso disso, do ensino da língua da Comunidade Autónoma.
- 18.^a Promoção e ordenamento do turismo no seu âmbito territorial.
- 19.^a Promoção do desporto e da adequada utilização dos tempos livres.
- 20.^a Assistência social.
- 21.^a Saúde e higiene.
- 22.^a A vigilância e proteção dos seus edifícios e instalações. A coordenação e demais faculdades relacionadas com as polícias locais nos termos que estabeleça uma lei orgânica.

§ 2 Constituição Espanhola

2. Decorridos cinco anos, e mediante a reforma dos seus Estatutos, as Comunidades Autónomas poderão ampliar sucessivamente as suas competências dentro do quadro estabelecido no artigo 149.

Artigo 149.

1. O Estado tem competência exclusiva sobre as seguintes matérias:

1.^a Regulação das condições básicas que garantem a igualdade de todos os espanhóis no exercício dos direitos e no cumprimento dos deveres constitucionais.

2.^a Nacionalidade, imigração, emigração, estrangeiros e direito de asilo.

3.^a Relações internacionais.

4.^a Defesa e Forças Armadas.

5.^a Administração da Justiça.

6.^a Legislação mercantil, penal e penitenciária; legislação processual, sem prejuízo das necessárias especialidades que neste domínio derivem das particularidades do direito substantivo das Comunidades Autónomas.

7.^a Legislação laboral; sem prejuízo da sua execução pelos órgãos das Comunidades Autónomas.

8.^a Legislação civil, sem prejuízo da conservação, modificação e desenvolvimento pelas Comunidades Autónomas dos direitos civis, forais ou especiais, onde existam. Em todo o caso, as regras relativas à aplicação e eficácia das normas jurídicas, relações jurídico-civis relativas às formas de casamento, ordenação dos registos e instrumentos públicos, bases das obrigações contratuais, normas para resolver conflitos de leis e determinação das fontes do Direito, com respeito, neste último caso, pelas normas de direito foral ou especial.

9.^a Legislação sobre propriedade intelectual e industrial.

10.^a Regime aduaneiro e tarifário; comércio externo.

11.^a Sistema monetário: divisas, câmbio e convertibilidade; bases da regulação do crédito, banca e seguros.

12.^a Legislação sobre pesos e medidas, determinação da hora oficial.

13.^a Bases e coordenação da planificação geral da atividade económica.

14.^a Finanças Públicas e Dívida do Estado.

15.^a Fomento e coordenação geral da investigação científica e técnica.

16.^a Saúde exterior. Bases e coordenação geral da saúde. Legislação sobre produtos farmacêuticos.

17.^a Legislação básica e regime económico da Segurança Social, sem prejuízo da execução dos seus serviços pelas Comunidades Autónomas.

18.^a Bases do regime jurídico das Administrações públicas e do regime estatutário dos seus funcionários que, em todo o caso, garantirão aos administrados um tratamento comum perante elas; o procedimento administrativo comum, sem prejuízo das especialidades derivadas da organização própria das Comunidades Autónomas; legislação sobre expropriação forçosa; legislação básica sobre contratos e concessões administrativas e sistema de responsabilidade de todas as Administrações públicas.

19.^a Pesca marítima, sem prejuízo das competências que na regulação do sector se atribuam às Comunidades Autónomas.

20.^a Marinha mercante e atribuição de bandeira aos navios; iluminação de costas e sinais marítimos; portos de interesse geral; aeroportos de interesse geral; controlo do espaço aéreo, trânsito e transporte aéreo, serviço meteorológico e matriculação de aeronaves.

21.^a Caminhos de ferro e transportes terrestres que circulem pelo território de mais do que uma Comunidade Autónoma; regime geral de comunicações; tráfego e circulação de veículos a motor; correios e telecomunicações; cabos aéreos, submarinos e radiocomunicação.

22.^a Legislação, ordenação e concessão de recursos e aproveitamentos hidráulicos quando as águas corram por mais de uma Comunidade Autónoma, e a autorização das instalações elétricas quando o seu aproveitamento afete outra Comunidade ou o transporte de energia saia do seu âmbito territorial.

§ 2 Constituição Espanhola

23.^a Legislação básica sobre proteção do meio ambiente, sem prejuízo da possibilidade de as Comunidades Autónomas estabelecerem normas adicionais de proteção. A legislação básica sobre montes, aproveitamentos florestais e vias pecuárias.

24.^a Obras públicas de interesse geral ou cuja realização afete mais do que uma Comunidade Autónoma.

25.^a Bases do regime mineiro e energético.

26.^a Regime de produção, comércio, posse e utilização de armas e explosivos.

27.^a Normas básicas do regime de imprensa, rádio e televisão e, em geral, de todos os meios de comunicação social, sem prejuízo das faculdades que para seu desenvolvimento e execução caibam às Comunidades Autónomas.

28.^a Defesa do património cultural, artístico e monumental espanhol contra a exportação e espoliação; museus, bibliotecas e arquivos de titularidade estatal, sem prejuízo da sua gestão por parte das Comunidades Autónomas.

29.^a Segurança pública, sem prejuízo da possibilidade de criação de polícias pelas Comunidades Autónomas na forma que se estabeleça nos respetivos Estatutos no quadro do que disponha uma lei orgânica.

30.^a Regulação das condições de obtenção, expedição e homologação de títulos académicos e profissionais e normas básicas para o desenvolvimento do artigo 27 da Constituição, a fim de garantir o cumprimento das obrigações dos poderes públicos nesta matéria.

31.^a Estatística para fins estaduais.

32.^a Autorização para a convocatória de consultas populares por via de referendo.

2. Sem prejuízo das competências que poderão assumir as Comunidades Autónomas, o Estado considerará o serviço da cultura como dever e atribuição essencial e facilitará a comunicação cultural entre as Comunidades Autónomas, de acordo com elas.

3. As matérias não atribuídas expressamente ao Estado por esta Constituição poderão caber às Comunidades Autónomas, em virtude dos seus respetivos Estatutos. A competência sobre as matérias que não tenham sido assumidas pelos Estatutos de Autonomia caberá ao Estado, cujas normas prevalecerão, em caso de conflito, sobre as das Comunidades Autónomas em tudo o que não esteja atribuído à exclusiva competência destas. O direito estatal será, em todo o caso, supletivo do direito das Comunidades Autónomas.

Artigo 150.

1. As Cortes Gerais, em matéria de competência estatal, poderão atribuir a todas ou a alguma das Comunidades Autónomas a faculdade de ditarem, para si mesmas, normas legislativas no quadro dos princípios, bases e diretrizes fixados por uma lei estatal. Sem prejuízo da competência dos Tribunais, em cada lei-quadro será estabelecida a modalidade de controlo das Cortes Gerais sobre estas normas legislativas da Comunidades Autónomas.

2. O Estado poderá transferir ou delegar nas Comunidades Autónomas, mediante lei orgânica, faculdades correspondentes a matéria de titularidade estatal que pela sua própria natureza sejam suscetíveis de transferência ou delegação. A lei preverá em cada caso a correspondente transferência de meios financeiros, assim como as formas de controlo a que se reserve o Estado.

3. O Estado poderá ditar leis que estabeleçam os princípios necessários para harmonizar as disposições normativas das Comunidades Autónomas, ainda em caso de matérias atribuídas à competência destas, quando assim o exija o interesse geral. Cabe às Cortes Gerais, por maioria absoluta de cada Câmara, a apreciação desta necessidade.

Artigo 151.

1. Não será necessário deixar decorrer o prazo de cinco anos, a que se refere o número 2 do artigo 148, quando a iniciativa do processo autonómico for acordada dentro do prazo do artigo 143, número 2, não só pelas Deputações ou pelos órgãos interinsulares correspondentes, mas também por três quartos dos municípios de cada uma das províncias em causa que representem, pelo menos, a maioria do censo eleitoral de cada uma delas e a

§ 2 Constituição Espanhola

referida iniciativa seja ratificada mediante referendo com o voto afirmativo da maioria absoluta dos eleitores de cada província nos termos que estabeleça uma lei orgânica.

2. Na situação prevista no número anterior, o procedimento para a elaboração do Estatuto será o seguinte:

1.º O Governo convocará todos os Deputados e Senadores eleitos nas circunscrições compreendidas no âmbito territorial que pretenda aceder ao autogoverno, para que se constituam em Assembleia, com o único propósito de elaborar o correspondente projeto de Estatuto de autonomia, mediante o acordo da maioria absoluta dos seus membros.

2.º Aprovado o projeto de Estatuto pela Assembleia de Parlamentares, este será remetido à Comissão Constitucional do Congresso, a qual, dentro do prazo de dois meses, o examinará, com o concurso e assistência de uma delegação da Assembleia proponente para determinar de comum acordo a sua formulação definitiva.

3.º Se o referido acordo for alcançado, o texto resultante será submetido a referendo do corpo eleitoral das províncias compreendidas no âmbito territorial do projetado Estatuto.

4.º Se o projeto de Estatuto for aprovado em cada província pela maioria dos votos validamente emitidos, será submetido às Cortes Gerais. Os plenários de ambas as Câmaras decidirão sobre o texto mediante um voto de ratificação. Aprovado o Estatuto, o Rei sancioná-lo-á e promulgá-lo-á como lei.

5.º Se não for alcançada a aprovação a que se refere o parágrafo 2.º deste número, o projeto de Estatuto será tramitado como projeto de lei perante as Cortes Gerais. O texto aprovado por estas será sujeito a referendo do corpo eleitoral das províncias compreendidas no âmbito territorial do projectado Estatuto. Caso seja aprovado pela maioria dos votos validamente expressos em cada província, proceder-se-á à sua promulgação nos termos do parágrafo anterior.

3. Nos casos dos parágrafos 4.º e 5.º do número anterior, a não aprovação do projeto de Estatuto por uma ou várias províncias não impedirá a constituição entre as restantes da Comunidade Autónoma projectada, na forma estabelecida pela lei orgânica prevista no número 1 deste artigo.

Artigo 152.

1. Nos Estatutos aprovados pelo procedimento a que se refere o artigo anterior, a organização institucional autonómica basear-se-á numa Assembleia Legislativa, eleita por sufrágio universal, com observância de um sistema de representação proporcional que assegure, também, a representação das diversas zonas do território; um Conselho de Governo com funções executivas e administrativas e um Presidente, eleito pela Assembleia, de entre os seus membros, e nomeado pelo Rei, a quem caberá a direção do Conselho de Governo, a suprema representação da respetiva Comunidade e a ordinária do Estado naquela. O Presidente e os membros do Conselho de Governo serão politicamente responsáveis perante a Assembleia.

Um Tribunal Superior de Justiça, sem prejuízo da jurisdição do Supremo Tribunal, culminará a organização judicial no âmbito territorial da Comunidade Autónoma. Nos Estatutos das Comunidades Autónomas poderão estabelecer-se os casos e as formas de participação daquelas na organização das demarcações judiciais do território. Tudo isso em conformidade com o previsto na lei orgânica do poder judicial e dentro da unidade e independência deste.

Sem prejuízo do disposto no artigo 123, as sucessivas instâncias processuais, conforme o caso, esgotam-se perante os órgãos judiciais radicados no mesmo território da Comunidade Autónoma em que esteja o órgão competente em primeira instância.

2. Uma vez sancionados e promulgados os respetivos Estatutos, estes só poderão ser modificados mediante os procedimentos neles estabelecidos e com referendo entre os eleitores inscritos nos censos correspondentes.

3. Mediante o agrupamento de municípios limítrofes, os Estatutos poderão estabelecer circunscrições territoriais próprias, que gozarão de plena personalidade jurídica.

Artigo 153.

O controlo da atividade dos órgãos das Comunidades Autónomas exercer-se-á:

§ 2 Constituição Espanhola

a) Pelo Tribunal Constitucional, relativamente à constitucionalidade das suas disposições normativas com força de lei.

b) Pelo Governo, com parecer prévio do Conselho de Estado, quanto ao exercício de funções delegadas a que se refere o número 2 do artigo 150.

c) Pela jurisdição contencioso-administrativa, quanto à administração autónoma e às suas normas regulamentares.

d) Pelo Tribunal de Contas, quanto às matérias económicas e orçamentais.

Artigo 154.

Um Delegado nomeado pelo Governo dirigirá a Administração do Estado no território da Comunidade Autónoma e coordená-la-á, quando se justifique, com a administração própria da Comunidade.

Artigo 155.

1. Se uma Comunidade Autónoma não cumprir as obrigações que a Constituição ou outras leis imponham, ou atuar de forma que atente gravemente contra o interesse geral de Espanha, o Governo, mediante prévio requerimento ao Presidente da Comunidade Autónoma e, em caso de não ser atendido, com a aprovação por maioria absoluta do Senado, poderá adotar as medidas necessárias para obrigar aquela ao cumprimento forçoso das referidas obrigações ou para a proteção do mencionado interesse geral.

2. Para a execução das medidas previstas no número anterior, o Governo poderá dar instruções a todas as autoridades das Comunidades Autónomas.

Artigo 156.

1. As Comunidades Autónomas gozarão de autonomia financeira para o desenvolvimento e execução das suas competências com respeito pelos princípios da coordenação com as Finanças do Estado e da solidariedade entre todos os espanhóis.

2. As Comunidades Autónomas poderão atuar como delegados ou colaboradores do Estado para a recolha, a gestão e a liquidação dos recursos tributários daquele, de acordo com as leis e os Estatutos.

Artigo 157.

1. Os recursos das Comunidades Autónomas serão constituídos por:

a) Impostos cedidos total ou parcialmente pelo Estado; sobretaxas sobre impostos estaduais e outras participações nas receitas do Estado.

b) Impostos próprios, taxas e contribuições especiais.

c) Transferências de um Fundo de Compensação interterritorial e outras dotações consignadas nos Orçamentos Gerais do Estado.

d) Rendimentos procedentes do seu património e receitas de direito privado.

e) O produto das operações de crédito.

2. As Comunidades Autónomas não poderão em caso algum adotar medidas tributárias sobre bens situados fora do seu território ou que constituam obstáculo à livre circulação de mercadorias ou serviços.

3. Mediante lei orgânica poderá regular-se o exercício das competências financeiras enumeradas no precedente número 1, as normas para resolver os conflitos que possam surgir e as possíveis formas de colaboração financeira entre as Comunidades Autónomas e o Estado.

Artigo 158.

1. Nos Orçamentos Gerais do Estado poderá estabelecer-se uma dotação às Comunidades Autónomas em função do volume dos serviços e atividades estaduais que tenham assumido e da garantia de um nível mínimo na prestação dos serviços públicos fundamentais em todo o território espanhol.

§ 2 Constituição Espanhola

2. Com o objetivo de corrigir desequilíbrios económicos interterritoriais e de tornar efetivo o princípio da solidariedade, será constituído um Fundo de Compensação que se destina a despesas de investimento, cujos recursos serão distribuídos pelas Cortes Gerais entre as Comunidades Autónomas e províncias, conforme os casos.

TÍTULO IX

Do Tribunal Constitucional

Artigo 159.

1. O Tribunal Constitucional é composto por 12 membros nomeados pelo Rei; destes, quatro sob proposta do Congresso por maioria de três quintos dos seus membros; quatro sob proposta do Senado com idêntica maioria; dois sob proposta do Governo, e dois sob proposta do Conselho Geral do Poder Judicial.

2. Os membros do Tribunal Constitucional deverão ser nomeados entre Magistrados e Procuradores, Professores de Universidade, funcionários públicos e Advogados, todos eles juristas de reconhecida competência com mais de quinze anos de exercício profissional.

3. Os membros do Tribunal Constitucional serão designados por um período de nove anos e serão renovados num terço em cada três.

4. A condição de membro do Tribunal Constitucional é incompatível: com qualquer mandato representativo; com cargos políticos ou administrativos; com o desempenho de funções diretivas num partido político ou sindicato, e com o emprego ao serviço dos mesmos; com o exercício das carreiras judicial e de procurador, e com qualquer atividade profissional ou mercantil.

No demais os membros do Tribunal Constitucional terão as incompatibilidades próprias dos membros do poder judicial.

5. Os membros do Tribunal Constitucional serão independentes e inamovíveis no exercício do seu mandato.

Artigo 160.

O Presidente do Tribunal Constitucional é nomeado entre os seus membros pelo Rei, sob proposta do mesmo Tribunal em pleno e por um período de três anos.

Artigo 161.

1. O Tribunal Constitucional tem jurisdição em todo o território espanhol e é competente para conhecer:

a) Do recurso de inconstitucionalidade contra leis e disposições normativas com força de lei. A declaração de inconstitucionalidade de uma norma jurídica com força de lei, interpretada pela jurisprudência, afetarà esta, se bem que a sentença ou sentenças em causa não perderão valor de caso julgado.

b) Do recurso de amparo por violação dos direitos e liberdades referidos no artigo 53, número 2, desta Constituição, nos casos e formas que a lei estabeleça.

c) Dos conflitos de competência entre o Estado e as Comunidades Autónomas ou dos conflitos destas entre si.

d) Das demais matérias que lhe sejam atribuídas pela Constituição ou pelas leis orgânicas.

2. O Governo poderá impugnar perante o Tribunal Constitucional as disposições e resoluções adotadas pelos órgãos das Comunidades Autónomas. A impugnação produzirá a suspensão da disposição ou resolução recorrida, mas o Tribunal, conforme o caso, deverá ratificá-la ou levantá-la num prazo não superior a cinco meses.

Artigo 162.

1. Têm legitimidade:

§ 2 Constituição Espanhola

a) Para interpor recurso de inconstitucionalidade: o Presidente do Governo, o Defensor do Povo, 50 Deputados, 50 Senadores, os órgãos colegiais executivos das Comunidades Autônomas e, quando for caso disso, as suas Assembleias.

b) Para interpor recurso de amparo: qualquer pessoa singular ou coletiva que invoque um interesse legítimo, bem como o Defensor do Povo e o Ministério Público.

2. Nos restantes casos, a lei orgânica determinará as pessoas e os órgãos legitimados.

Artigo 163.

Quando um órgão judicial considere, nalgum processo, que uma norma com força de lei, aplicável ao caso, de cuja validade dependa a decisão, possa ser contrária à Constituição, colocará a questão perante o Tribunal Constitucional nas situações, na forma e com os efeitos que estabeleça a lei, que em nenhum caso serão suspensivos.

Artigo 164.

1. As sentenças do Tribunal Constitucional serão publicadas no boletim oficial do Estado com os votos particulares, se os houver. Têm valor de caso julgado a partir do dia seguinte ao da sua publicação e não cabe qualquer recurso contra elas. As que declarem a inconstitucionalidade de uma lei ou de uma norma com força de lei e todas as que não se limitem à aplicação subjetiva de um direito, gozam de plenos efeitos perante todos.

2. Salvo quando a decisão disponha outra coisa, subsistirá a vigência da lei na parte não afetada pela inconstitucionalidade.

Artigo 165.

Uma lei orgânica regulará o funcionamento do Tribunal Constitucional, o estatuto dos seus membros, o procedimento perante o mesmo e as condições para o exercício das ações.

TÍTULO X

Da reforma constitucional

Artigo 166.

A iniciativa de reforma constitucional será exercida nos termos previstos nos números 1 e 2 do artigo 87.

Artigo 167.

1. Os projetos de reforma constitucional deverão ser aprovados por uma maioria de três quintos de cada uma das Câmaras. Se não houver acordo entre ambas, procurar-se-á obter este acordo mediante a criação de uma Comissão de composição paritária de Deputados e Senadores, que apresentará um texto que será votado pelo Congresso e pelo Senado.

2. Se não se conseguir a aprovação mediante o procedimento do número anterior, e sempre que o texto tiver obtido o voto favorável da maioria absoluta do Senado, o Congresso, por maioria de dois terços, poderá aprovar a reforma.

3. Aprovada a reforma pelas Cortes Gerais, esta será submetida a referendo para sua ratificação quando assim o solicitarem, dentro dos quinze dias seguintes à sua aprovação, um décimo dos membros de qualquer das Câmaras.

Artigo 168.

1. Quando se propuser a revisão total da Constituição ou uma parcial que afete o Título preliminar, o Capítulo segundo, primeira Secção do Título I, ou o Título II, proceder-se-á à aprovação do seu início por maioria de dois terços de cada Câmara, e à dissolução imediata das Cortes.

2. As Câmaras eleitas deverão ratificar a decisão e proceder ao estudo do novo texto constitucional, que deverá ser aprovado por maioria de dois terços de ambas as Câmaras.

§ 2 Constituição Espanhola

3. Aprovada a reforma pelas Cortes Gerais, será submetida a referendo para a sua ratificação.

Artigo 169.

Não poderá iniciar-se a reforma constitucional em tempo de guerra ou de vigência de algum dos estados previstos no artigo 116.

DISPOSIÇÕES ADICIONAIS

Primeira.

A Constituição protege e respeita os direitos históricos dos territórios forais.

A atualização geral do referido regime foral concretizar-se-á, em cada caso, no quadro da Constituição e dos Estatutos de Autonomia.

Segunda.

A declaração de maioria contida no artigo 12 desta Constituição não prejudica as situações protegidas pelos direitos forais no âmbito do Direito privado.

Terceira.

A modificação do regime económico e fiscal do arquipélago das Canárias dependerá de relatório prévio da Comunidade Autónoma ou, se for o caso, do órgão provisório autonómico.

Quarta.

Nas Comunidades Autónomas onde tenha a sua sede mais do que um Tribunal Territorial, os Estatutos de Autonomia respetivos poderão manter os existentes, distribuindo as competências entre eles, sempre em conformidade com o previsto na lei orgânica do poder judicial e dentro da unidade e independência deste.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Primeira.

Nos territórios dotados de regime provisório de autonomia, os seus órgãos colegiais superiores, mediante acordo adotado por maioria absoluta dos seus membros, poderão substituir a iniciativa que no número 2 do artigo 143 é atribuída às Deputações Provinciais ou aos órgãos interinsulares correspondentes.

Segunda.

Os territórios que no passado tiverem plebiscitado afirmativamente projetos de Estatuto de autonomia e contem, no momento da promulgação desta Constituição, com regimes provisórios de autonomia poderão proceder imediatamente na forma prevista no número 2 do artigo 148, quando nisso acordarem, por maioria absoluta, os seus órgãos pré-autonómicos colegiais superiores, comunicando-o ao Governo. O projeto de Estatuto será elaborado de acordo com o estabelecido no artigo 151, número 2, sob convocatória do órgão colegial pré-autonómico.

Terceira.

A iniciativa do processo autonómico por parte das Corporações locais ou dos seus membros, prevista no número 2 do artigo 143, entende-se diferida, com todos os seus efeitos, até à celebração das primeiras eleições locais uma vez que Constituição esteja em vigor.

§ 2 Constituição Espanhola

Quarta.

1. No caso de Navarra, e para efeito da sua incorporação no Conselho Geral Basco ou no regime autonómico basco que o substitua, em vez do que estabelece o artigo 143 da Constituição, a iniciativa cabe ao Órgão Foral competente, o qual adotará a sua decisão por maioria dos membros que o compõem. Para a validade da referida iniciativa, será preciso, ainda, que a decisão do Órgão Foral competente seja ratificada por referendo expressamente convocado para o efeito, e aprovado pela maioria dos votos válidos emitidos.

2. Se a iniciativa não tiver sucesso, só se poderá repetir a mesma em diferente período do mandato do Órgão Foral competente, e em todo o caso, quando tiver decorrido o prazo mínimo que estabelece o artigo 143.

Quinta.

As cidades de Ceuta e Melilla poderão constituir-se em Comunidades Autónomas se assim o decidirem os seus respetivos Ajuntamentos, mediante acordo adotado pela maioria absoluta dos seus membros e se as Cortes Gerais assim o autorizarem, mediante uma lei orgânica, nos termos previsto no artigo 144.

Sexta.

Quando forem remetidos à Comissão Constitucional do Congresso vários projetos de Estatuto, estes serão tramitados por ordem de entrada naquela, e o prazo de dois meses a que se refere o artigo 151 começará a contar desde que a Comissão termine o estudo do projeto ou projetos de que sucessivamente tenha tomado conhecimento.

Sétima.

Os organismos provisórios autonómicos considerar-se-ão dissolvidos nos seguintes casos:

- a) Uma vez constituídos os órgãos que estabeleçam os Estatutos de Autonomia aprovados conforme esta Constituição.
- b) Na situação em que a iniciativa do processo autonómico não teve sucesso por não cumprir os requisitos previstos no artigo 143.
- c) Se o organismo não tiver exercido o direito que lhe reconhece a disposição transitória primeira no prazo de três anos.

Oitava.

1. As Câmaras que aprovaram a presente Constituição assumirão, após a entrada em vigor da mesma, as funções e competências que nela se assinalam, respetivamente, para o Congresso e o Senado, sem que em nenhum caso o seu mandato se estenda para além de 15 de junho de 1981.

2. Para os efeitos do estabelecido no artigo 99, a promulgação da Constituição considerar-se-á como pressuposto constitucional de que depende a sua aplicação. Para tal efeito, a partir da citada promulgação abrir-se-á um período de trinta dias para a aplicação do disposto no referido artigo.

Durante este período, o atual Presidente do Governo, que assumirá as funções e competências que para este cargo estabelece a Constituição, poderá optar por utilizar a faculdade que lhe reconhece o artigo 115 ou dar lugar, através de demissão, à aplicação do estabelecido no artigo 99, ficando neste último caso na situação prevista no número 2 do artigo 101.

3. Em caso de dissolução, de acordo com o previsto no artigo 115, e se não se tiver desenvolvido legalmente o previsto nos artigos 68 e 69, aplicar-se-ão nas eleições as normas anteriormente vigentes, com as únicas exceções de que no que se refere às inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará diretamente o previsto no parágrafo segundo da alínea b), do número 1 do artigo 70 da Constituição, bem como o disposto na mesma relativamente à idade para o voto e o estabelecido no artigo 69, número 3.

§ 2 Constituição Espanhola

Nona.

Decorridos três anos da primeira eleição dos membros do Tribunal Constitucional, proceder-se-á por sorteio à designação de um grupo de quatro membros da mesma procedência eletiva que deva cessar funções e ser renovado. Apenas para estes efeitos serão considerados agrupados como membros da mesma procedência os dois designados sob proposta do Governo e os dois que procedem da proposta formulada pelo Conselho Geral do Poder Judicial. Do mesmo modo proceder-se-á decorridos outros três anos entre os dois grupos não afetados pelo sorteio anterior. A partir de então estar-se-á no estabelecido no número 3 do artigo 159.

DISPOSIÇÃO DERROGATÓRIA

1. Fica derogada a Lei 1/1977, de 4 de janeiro, para a Reforma Política, assim como, se não estiverem já derogadas pela anteriormente mencionada Lei, a dos Princípios do Movimento Nacional, de 17 de maio de 1958; o Foro dos Espanhóis, de 17 de julho de 1945; o do Trabalho, de 9 de março de 1938; a Lei Constitutiva das Cortes, de 17 de julho de 1942; a Lei de Sucessão na Chefia do Estado, de 26 de julho de 1947, todas elas modificadas pela Lei Orgânica do Estado de 10 de janeiro de 1967, e nos mesmos termos esta última e a do Referendo Nacional de 22 de outubro de 1945.

2. Mesmo que pudesse conservar alguma vigência, considera-se definitivamente derogada a Lei de 25 de outubro de 1839 no que poderia afetar as províncias de Álava, Guipúzcoa e Vizcaya.

Nos mesmos termos considera-se definitivamente derogada a Lei de 21 de julho de 1876.

3. Do mesmo modo ficam derogadas todas as disposições que se oponham ao estabelecido nesta Constituição.

DISPOSIÇÃO FINAL

Esta Constituição entrará em vigor no mesmo dia da publicação do seu texto oficial no boletim oficial do Estado. Será publicada também nas restantes línguas de Espanha.